

San Antonio, catorce de enero de dos mil veintidós

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante demanda de fecha 6 de agosto de 2021, comparece **Pedro Ignacio Peña Sánchez**, chileno, abogado, cédula nacional de identidad N° 16.658.896-0, en calidad de mandatario judicial de don **PEDRO ANTONIO CAMERATI ACEVEDO**, chileno, divorciado, asistente social, cédula de identidad N° 5.782-175-2, domiciliado en avenida El Peral N°118, comuna de Cartagena, Región de Valparaíso, deduciendo demanda en procedimiento de aplicación general por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas, en contra de la ex empleadora de su mandante, la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO**, cuyo representante legal es don **Alfonso Adrián Muñoz Aravena**, alcalde, cédula de identidad N°9.505.477-3, chileno, ambos domiciliados en avenida Las Cruces Norte N° 401, comuna de El Tabo, región de Valparaíso, de conformidad a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que pasa a exponer.

Señala que su representado comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia a partir del 1 de enero de 2016 hasta la separación el 31 de enero de 2021, a favor de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, mediante múltiples contratos de honorarios, pero que en la realidad eran contratos de trabajo.

Expone que durante todo el tiempo que su representado desempeñó sus servicios a favor de la demandada, trabajó como *asistente social* en el Departamento Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, además de realizar otras funciones que no eran propias de su cargo, el que según sostiene, era evidentemente genérico, no accidental y habitual en la organización jerárquica de la Municipalidad. Aduce que durante todo el periodo fue sujeto a



jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y, a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones.

Sostiene que, en efecto, el contrato celebrado con la demandada constituye una abierta infracción a la legislación aplicable, pues corresponde a aquellos denominados *contratos de honorarios*. Refiere que en la especie, corresponde imputarle bajo el principio de la supremacía de la realidad la calidad de una efectiva relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia.

Añade, que su representado durante todo el tiempo que trabajó a favor de la demandada, esto es más de 5 años, realizó numerosas funciones, y en virtud de éstas, es que se fueron extendiendo sus labores por un extenso periodo.

Señala que previo a determinar el régimen jurídico aplicable a la relación jurídica laboral entre su representado y el municipio de El Tabo, como marco regulatorio, es preciso señalar qué regímenes estatutarios no fueron aplicables.

En tal sentido, indica que su mandante nunca fue contratado como funcionario municipal en ninguna de sus categorías conforme lo dispuesto por la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, debido a que no ingresó a prestar servicios en la forma que dichas normativas especiales prevén, ni en las condiciones que esa normativa establece, planta, contrata y suplente, y afirma que siendo persona natural, su representado tampoco estuvo sometido a un estatuto especial de aquellos que aplican en el Municipio.



Aduce que, según los contratos celebrados por su mandante, este prestó servicios en el Departamento Social, obligándose a desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: atención de público, entrega de pasajes a la comunidad con destino a Santiago y Valparaíso, evaluación de casos sociales para la compra de insumos asociados a la caja chica administrada por la Dirección de Desarrollo Comunitario, evaluación de casos sociales para la entrega de agua, realizada por el camión aljibe, orientación habitacional y trámites asociados a la postulación de subsidios habitacionales, evaluación y seguimiento de casos de la Oficina Regional de Asistencia Social del Ministerio del Interior (ORASMI), realizar la postulación de becas municipales de estudio, elaboración de memos, oficios, certificados sociales e informes sociales, realizar visitas domiciliarias para diagnóstico e intervención social, entre otras funciones ajenas a su cargo, tales como participar en actividades municipales como el día del funcionario, día del niño, ir a realizar labores en el proceso fúnebre de los habitantes de la comuna, como dar el pésame, gestionar los gastos fúnebres, etc.

Refiere que lo anterior no obsta a que las funciones se fueran ampliando durante la extensión de su período laboral, puesto que según sostiene, sus ocupaciones fueron muchas más de las que se especifican en la demanda de autos.

Añade que, conforme lo anterior, y a pesar de las numerosas funciones descritas en los párrafos anteriores, se le contrató bajo la norma del artículo 4 de la Ley N°18.883, esto es, aquella que permite la contratación sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias.

Expone que, sin embargo, dicha disposición establece determinadas exigencias adicionales cuales son que tales materias no sean las habituales de



la municipalidad, que se trate de cometidos específicos y que sean transitorios y temporales.

Afirma que las labores prestadas por su representado jamás fueron no habituales de la Municipalidad, tampoco se trató de cometidos específicos, ni mucho menos los servicios que prestó a su ex empleadora se pueden catalogar de transitorios y temporales, puesto que la relación con su ex empleadora se llevó a cabo fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, siendo aplicable en este caso la norma común y general en derecho laboral, y el Código del Trabajo en toda su extensión.

Destaca que las funciones que desarrolló su representado a favor de su ex empleadora no reunían las exigencias que para ello establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, norma excepcional que por lo demás debe ser interpretada en sentido estricto y restringido, y que considera dichas exigencias sólo para aceptar la existencia de un contrato de honorarios bajo dicha preceptiva.

Razona que, no estando bajo un estatuto laboral especial conforme al artículo 1 inciso 2 del Código del Trabajo, norma que cita; y tampoco siendo aplicable a este caso el artículo 4 de la ley N° 18.883, que de igual forma cita, entonces procede establecer que la condición laboral de su mandante corresponde a la regla general, esto es, una relación laboral propia de un contrato de trabajo regulado por el Código del Trabajo, al ser esta la norma genérica respecto al vínculo que une a los trabajadores con sus empleadores.

Refiere que el día 31 de enero de 2021, la Municipalidad de El Tabo separó a su representado de manera irregular y, a su vez, faltando a todo requisito legal. En efecto, sostiene que no señaló con exactitud y claridad los hechos ni las causales por las cuales dio término a la relación laboral; no



indicó ninguna causal legal de las contenidas en el Código del Trabajo, infringiendo flagrantemente el artículo 162 inciso primero del citado cuerpo legal, así como tampoco acreditó los pagos previsionales de todo el período de la relación laboral; entre otras irregularidades.

Hace presente que el día 22 de enero de 2021 su mandante se dirige a firmar su contrato para el año 2021, y en ese momento se percató que el contrato señalaba que tenía período de duración hasta el 31 de enero del 2021, ante lo cual se dirige a conversar con la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario quien le informa que se prescindiría de sus servicios a partir del mes de febrero.

Expone que, en consecuencia, y conforme señala el artículo 168 inciso primero, el despido debe entenderse realizado "sin invocación de causa legal", y por tal razón debe condenarse a la empleadora al pago de las indemnizaciones contempladas en el artículo 162 inciso cuarto y 163 inciso dos, más el recargo del artículo 168 inciso primero letra b), todas normas del Código del Trabajo.

Indica que resulta indispensable para los efectos de su libelo, centrar la atención en las cuantiosas diferencias que existen entre un contrato de trabajo y uno a honorarios, toda vez que la demandada no consideró al momento de celebrar los contratos de honorarios con su representado, el estatuto jurídico idóneo que resultó en su momento aplicable.

Indica que, en tal sentido, la empleadora consideró de forma unilateral las condiciones de dicho contrato y en definitiva no reconoció que en la práctica y más allá de lo que señalen los documentos, la relación entre su mandante y el municipio constituyó un contrato de trabajo y, por ende, se alejaron claramente de lo que contempla un contrato de honorarios; todo lo



anterior, añade, basado en las diferencias que se suscitaron entre los documentos físicos y los hechos realmente acontecidos en la realidad.

Explica, en cuanto a la forma que puede revestir la prestación, que el contrato de trabajo sólo puede revestir una forma, que es la que se estipula en el contrato para la prestación de servicios, y que el contrato a honorarios admite en la práctica dos formas; como contrato de arrendamiento para la confección de una obra material y como contrato de arrendamiento de servicios.

Reitera que en la especie, su representado prestó servicios a favor de la Municipalidad de El Tabo como "asistente social" del Departamento Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, obligándose a desarrollar, las funciones ya señaladas.

Afirma que lo anterior implica un cargo que figuró como habitual de la institución, y que conforme a ello no pudo adoptar la forma de un contrato de arrendamiento de obra material ni de servicios.

Señala, en cuanto a la a la forma en que se prestan los servicios, que en el contrato de trabajo el trabajador presta sus servicios de manera permanente y que se constituyen como propios de la institución, y que en el contrato a honorarios el profesional presta sus servicios de forma independiente, a título de asesoría, consulta o investigación respecto de un trabajo o bien en función de una obra o proyecto determinados.

Afirma que su mandante prestó servicios a favor de la Municipalidad de El Tabo durante 5 años, de forma constante, sujeto a una jornada de trabajo.

Sostiene que es dable inferir que las labores las desarrolló en un contexto de permanencia y en razón a una labor intrínseca de la propia



municipalidad, es decir, como funciones propias de la institución, e indica que en efecto, la labor durante el tiempo de su contrato no correspondió en la práctica a la ejecución de labores específicas como consultorías o de asesoría, siendo éstas últimas propias de la contratación a honorarios.

Explica, en cuanto a las órdenes que pueda impartir el empleador, que en el contrato de trabajo el trabajador está constantemente sometido al deber de obediencia, claro índice de existir una relación de subordinación y dependencia, en tanto que en el contrato a honorarios, el profesional no recibe órdenes ni instrucciones con motivo de su trabajo, y que podría recibir eventuales lineamientos en cuanto a la ejecución del servicio, pero no órdenes directas de quien asume el precio del servicio.

Refiere que en la especie durante todo el periodo por el cual se extendió la relación laboral, su mandante fue objeto de instrucciones por parte de su ex jefatura doña María Jesús Gálvez, doña Carolina Fuentes Navarro Jefa del Departamento Social, doña Mónica Navarro y doña Cleria García, Directora de la DIDECO, estando sujeto en todo momento a la observancia de estos, tanto al inicio como al término del turno de trabajo, y ejecutando en la práctica una serie de labores que tuvieron su origen en el poder de mando de su empleador y en las funciones que se consignan en los contratos celebrados.

Agrega que estas instrucciones se verificaban diariamente por correo electrónico, teléfono celular, mensajes de WhatsApp y direcciones verbales en la misma oficina de la jefatura, y que con ocasión de la jefatura, debía incluso apoyar en todo tipo de actividades municipales como el día del funcionario, día del niño, realizar labores en procesos fúnebres de los habitantes de la comuna.



Sostiene que la constante dirección de la jefatura directa no constituye un simple lineamiento, sino que un claro ejemplo de existir un vínculo de subordinación y dependencia, y que las directrices fueron claras, precisas y ejercidas directamente sobre la persona del mandante, sin posibilidad alguna de negarse a la ejecución de dichas instrucciones.

Expone, en cuanto a la obligación de cumplir con una jornada de trabajo y de asistir regularmente a la empresa, que en el contrato de trabajo, el trabajador no solo tiene la obligación de asistir a prestar sus servicios, sino que también debe hacerlo de forma regular y periódica en las dependencias de la empresa, de manera tal que constituye una obligación el cumplir con la jornada de trabajo pactada en el contrato, lo que, según sostiene, constituye un índice de una relación de subordinación y dependencia, y que en el contrato a honorarios, el profesional no está obligado a asistir regularmente a la empresa, ya que puede ser que asista con motivo de su trabajo, pero en ningún caso de manera regular ni menos cumplir con una jornada de trabajo.

Sostiene que en la práctica su representado cumplió con una jornada de trabajo que se distribuía de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas, y que sin embargo, en la práctica trabajaba fuera de la jornada y también los fines de semana y festivos conforme a los requerimientos de la jefatura.

Hace presente que registraba su entrada y salida de la jornada mediante un registro biométrico, lo que, afirma, no se condice con las características propias de un contrato de honorarios sino con uno de carácter subordinado y dependiente del empleador, esto es, un contrato de trabajo.

Manifiesta, en cuanto al lugar y regularidad en la prestación de los servicios, que en el contrato de trabajo, el trabajador presta sus servicios en las



dependencias de la institución de forma regular y continua, en tanto que en el contrato a honorarios, el profesional trabaja por su cuenta y la asistencia a la empresa es esporádica, irregular y discontinua o puede ser que siquiera exista.

Refiere que en la especie, su representado cumplía su jornada laboral en las dependencias de la Municipalidad, en el edificio ubicado en Las Cruces Norte N° 401, comuna de El Tabo, y que sin perjuicio de lo anterior, debía también dirigirse a dónde fuera destinado según su jefatura a efectos de realizar sus labores en terreno.

Indica, por otro lado, que contaba con todos los insumos necesarios para su gestión administrativa, esto es computador, escritorio, silla, artículos de oficina, papelería, credencial municipal y ropa institucional como chaqueta, poleras, camisa, gorro, etc., todos suministrados por el Municipio.

Hace presente, asimismo, que los contratos suscritos por la demandada y su representado reconocen un grupo de beneficios, tales como feriado legal, permiso administrativo, aguinaldos, viáticos y licencias médicas, entre otros.

Aduce, en cuanto al pago por los servicios prestados, que en el contrato de trabajo, la retribución que obtiene el trabajador a cambio de la prestación de servicios que realiza se denomina remuneración, en tanto que en el contrato a honorarios, el pago se denomina honorario.

Agrega que, si bien en la práctica su representado emitió boletas de honorarios a nombre de la Municipalidad de El Tabo, en la práctica recibía la contraprestación directamente de la Dirección de Administración y Finanzas, por montos equivalentes y mensuales durante toda la vigencia de la relación laboral.



Refiere que conforme al principio de la realidad y de acuerdo a la cotidianeidad del pago, esta constituía una forma de remuneración encubierta en un pseudo y peculiar *honorario*, el cual se pagaba previa confección de un informe mensual de gestión o actividades que se adjuntaba a la boleta emitida a nombre la ex empleadora y del cual el municipio guarda registro.

Explica que el contrato de trabajo es tal por existir entre el trabajador y el empleador una relación de subordinación y dependencia, elemento propio de este tipo de contrato y que lo define, en tanto que en el contrato a honorarios no existe tal vínculo, ya que las partes solo se encuentran ligadas por una relación que se limita, por un lado, al cumplimiento del servicio específico respecto de la institución que lo contrata, y por otro, el prestador o profesional del servicio, por la efectividad de recibir el pago u honorario.

Aduce que de acuerdo a lo señalado, para probar la existencia de un contrato de trabajo no basta con acreditar la prestación de servicios personales, sino que es indispensable que éstos se hayan realizado bajo dependencia y subordinación, elemento que se materializa cuando concurren diversas manifestaciones o elementos fácticos determinantes, tales como la obligación del trabajador de dedicarse al desempeño de la faena convenida un espacio de tiempo significativo, como es la jornada de trabajo, el cumplimiento de un horario diario y semanal, o que el trabajo sea realizado bajo ciertas pautas de dirección y organización que imparte el supuesto empleador, todas las cuales se configuran y definen en cada caso concreto por las particularidades y modalidades que presente la prestación de servicios del trabajador.

Sostiene que en la especie, entre su mandante y su ex empleadora existió por 5 años un vínculo de subordinación y dependencia, todo esto, sostiene, conforme a las labores que desempeñaba conforme a su contrato, a las jornadas de trabajo de las que fue objeto, las órdenes impartidas por sus



superiores directos, con la asistencia diaria y extensiva en el tiempo a las dependencias de la Municipalidad y demás lugares en los cuales debía ejercer sus labores fuera de su jornada laboral, y sumado a todo lo anterior las constantes vigilancias de las que fue objeto en la prestación de sus labores.

Refiere que, siendo todos estos hechos claros índices de existir en la práctica una relación regida por el artículo 7° del Código del Trabajo, y que desconoció en todo momento la Municipalidad, -cuestión precisa que su parte intenta probar, con el efecto de que el Tribunal constate y declare que dichos índices constituyeron el reconocimiento que en la práctica ha sido cuestionado por la demandada-, no procede tal discusión, toda vez que, constatados dichos índices procede necesariamente la declaración de relación laboral en la sentencia definitiva.

Sostiene que la remuneración de su representado al momento de ser despedido, era por un monto de \$775.845.- pesos mensuales, e indica que su ex empleadora exigía a su mandante previo pago de la remuneración mencionada, la confección de un informe de gestión que se adjuntaba a la boleta de honorario emitida a nombre de esta. Expone que dicho informe daba cuenta de las funciones desarrolladas por el mandante durante el periodo correspondiente a la mensualidad señalada en la boleta.

Afirma que por las razones explicadas, la demandada no pudo estar en condiciones de dar cumplimiento íntegro y completo a la obligación que imperativamente le impone el inciso 5° del artículo 162° del Código del Trabajo, norma que cita.

Asimismo, sostiene que la demandada hizo caso omiso de lo preceptuado en el inciso 6° del artículo 162° del Código del Trabajo, norma que de igual forma cita.



Aduce que el incumplimiento de los deberes señalados en los incisos 5° y 6° del artículo 162° ya citado, les faculta para reclamar la aplicación de la denominada "Ley Bustos".

Explica que la omisión en el envío de la carta de término de los servicios o carta de despido en que incurrió la empleadora, ha vulnerado la disposición normativa de los incisos 1° y 5° del artículo 162° del Código del Trabajo, toda vez que no indicó por escrito cuáles fueron los fundamentos de hecho y de derecho para tomar la drástica decisión de desvincular a su representado, con lo cual, le ha dejado en la más completa indefensión, otorgándole al despido, por esa sola omisión la categoría de despido injustificado.

Expone, sobre las cotizaciones adeudadas que, como expuso previamente, la ex empleadora adeuda a su representado, cotizaciones de seguridad social correspondientes a cotizaciones previsionales del Fondo de Pensiones, Fondo de Salud y del Fondo de Cesantía por todo el período trabajado entre el día 1 de enero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021, por lo que corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones y condenar a su pago, para lo cual se debe ordenar oficiar a las entidades previsionales respectivas a objeto que inicien los trámites de cobranza judicial.

Cita los incisos quinto y sexto del artículo 162 del Código del Trabajo, y afirma que procede, como lo ha señalado la jurisprudencia, aplicar la sanción de nulidad del despido a la Ilustre Municipalidad de El Tabo, puesto que se encuentra en mora de pagar las cotizaciones previsionales, por lo que es merecedora de tal sanción.

Refiere que la continuidad de las labores merece un capítulo aparte, puesto que además de ser su declaración una de las peticiones concretas



sometidos al Tribunal, el elemento de la continuidad es de aquellos que permite a su parte poder comprobar que las supuestas contrataciones a honorarios no eran tales, puesto que éste elemento de continuidad de labores en el tiempo, se opone a uno de los aspectos que configura el contrato de honorarios que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, puesto que, según sostiene, la continuidad es absolutamente contraria al aspecto temporal y específico que admite este tipo de contrataciones.

Hace presente que la continuidad en los presentes autos, encuentra su comprobación en las sucesivas boletas de honorarios emitidas por su representado a favor de la Municipalidad de El Tabo por 5 años y 30 días, teniendo el carácter de mensuales y por montos equivalentes, los cuales fueron progresivamente en aumento, y en documentos que acreditan la permanencia de aquel desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021.

Refiere que es la continua emisión de las boletas lo que comprueba que su representado prestó servicios de forma permanente y constante, dedicando su tiempo de forma exclusiva a la demandada, en los términos que lo realiza un trabajador sujeto a una relación laboral.

Manifiesta que, en efecto el artículo 4° de la ley N°18.883 faculta para contratar bajo la modalidad a honorarios para cometidos específicos y no habituales del municipio, sin embargo sostiene que la contratación hecha a su representado, fue para realizar funciones generales y habituales de éste, por lo que la Municipalidad ha estado infringiendo constantemente la norma del artículo 7° de la Constitución Política de la República, puesto que los cometidos específicos y no habituales por los cuales se faculta a la municipalidad a contratar no fueron tales en este caso, no estando facultada la ex empleadora para contratarlo bajo esa modalidad.



Alega que, habiendo señalado que la relación fáctica entre su representado y la Municipalidad demandada sobrepasó los límites permitidos por el artículo 4 de la Ley N°18.883, y, que de esa forma se infringió el principio constitucional de juricidad, al no estar autorizada la ex empleadora para celebrar con el demandante dicha contratación, cabe entonces determinar el estatuto jurídico aplicable a este caso particular.

Refiere que conforme lo anterior es necesario fijar el ámbito de aplicación del Código del Trabajo, que está establecido en su artículo 1°, norma que cita.

Explica que el artículo primero del Código del Trabajo establece que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por dicho cuerpo legal, y que además se aplicarán sus leyes complementarias, por lo que en el inciso primero de dicho artículo se fijó por el legislador el ámbito de aplicación general del Código del Trabajo, a aquellas relaciones que se susciten entre empleadores y trabajadores.

Agrega que, posteriormente en el inciso segundo se establece que las normas del Código del Trabajo no se aplicarán a los funcionarios de la administración del Estado, ya sea centralizada o descentralizada entre otros, siempre, y como señala textualmente el código, que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por Ley a un estatuto especial.

Sostiene que conforme lo anterior, su representado nunca ocupó la calidad de funcionario municipal puesto que no fue contratado como personal de planta, contrata ni suplente, de lo cual queda descartada la hipótesis de que sus servicios se hayan realizado bajo el cargo de funcionario de la administración del Estado a través de un órgano del Estado descentralizado, como lo es el municipio.



Alega que su contratación se realizó porque así lo permite el artículo 4° de la Ley N°18.883, contratación que constituye una excepción dentro del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, toda vez que permitió su vinculación con la ex empleadora a través de pseudos contratos de honorarios.

Menciona que en atención a lo anterior, es que si bien su contratación se realizó porque así lo permite una ley, es ésta misma la que ha fijado el marco de contratación y los requisitos para celebrar dichos contratos -labores accidentales y no habituales, cometidos específicos-, exigencias que en el caso particular no se cumplieron durante todo el tiempo que duró la relación laboral, puesto que al contrario, los servicios que prestó su representado a favor de su ex empleadora se trataron en todo momento de labores permanentes, esenciales y fundamentales del municipio, y que además los trabajos que realizó se enmarcaron dentro de los servicios que la Municipalidad permanentemente realiza, por lo tanto éstos no pueden ser catalogados de ninguna manera como no habituales, considerando además que los cometidos que prestó bajo el poder de mando de su ex empleadora fueron generales y comunes, desarrollados por períodos extensos de tiempo, circunstancias todas que permiten excluir el carácter de específico de los mismos.

Indica que en atención a lo anterior, y habiendo determinado que su contratación no se ajustó al ámbito de aplicación del artículo 4° de la Ley N° 18.883, y, que tampoco fue contratado bajo el régimen de planta, contrata o suplente, es que cabe preguntarse entonces cual es el régimen legal aplicable a los servicios prestados a favor de la demandada.

Refiere que la respuesta la encontramos en el inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, norma que cita.



Sostiene que el inciso tercero de la citada norma establece el régimen aplicable al supuesto de encontrarse un trabajador de la Administración del Estado en la situación en que sus labores no estén afectas a un estatuto especial, siendo en dicho caso aplicable la regla general y común, esto es, las normas del Código del Trabajo. Menciona que conforme lo anterior, el municipio estuvo facultado para contratar a su representado bajo las normas del Código del Trabajo, puesto que en este caso resulta aplicable el inciso tercero de la norma ya referida.

Alega que, en atención a que el mandante prestó servicios como trabajador a favor de su ex empleadora dentro del ámbito de lo que se denomina un vínculo de subordinación y dependencia, para una entidad que corresponde a la administración descentralizada del Estado, no encontrándose afecto a ningún estatuto especial que rijan su contratación, y, en plena aplicación del inciso tercero artículo 1° del Código del Trabajo, es que corresponde aplicar la regla general establecida en el inciso primero del ya referido artículo del Código del Trabajo, el que señala que la relación entre empleadores y trabajadores se regirán por dicho cuerpo legal.

Sostiene que, en virtud de la calificación jurídica de la relación laboral expuesta precedentemente entre las partes, solicita se declare que entre la demandada y su representado existió relación laboral entre el día 1 de enero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021 bajo las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo.

Añade que, en virtud de lo expuesto solicita se declare la continuidad de los servicios prestados por su mandante a favor de la Ilustre Municipalidad de El Tabo desde el día 1 de enero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021.



Expone que con motivo del despido ilegal y arbitrario del que fue víctima su representado, la demandada adeuda los siguientes conceptos que se señalan: a) en virtud del inciso 4° del artículo 162° del Código del Trabajo, la sustitutiva de aviso previo por la suma de \$775.845; b) En virtud del inciso 2° del artículo 163 del Código del Trabajo, la indemnización por años de servicios correspondiente a 5 años, por \$3.879.225; c) En virtud de la letra b) del artículo 168° del Código del Trabajo, el recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio, ascendente a \$1.939.612.

Afirma que la demandada adeuda a su mandante la siguiente partida correspondiente a los feriados devengados: a) Feriado legal por \$2.741.319.- que equivalen a 106 días -5 años-; b) Feriado proporcional por \$32.326.- que equivalen a 1,25 días -30 días-.

Aduce que a las sumas por indemnizaciones, sus recargos y compensación de feriado detalladas precedentemente, cabe agregar las que provienen de: a. Cotizaciones de seguridad social (Afp, salud y cesantía) durante todo el periodo que duró la relación laboral; y b. Las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162° del Código del Trabajo, denominada "Ley Bustos".

Solicita tener por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas en contra de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, ya individualizada, a efectos de que se declare la relación laboral, la continuidad de ésta, la nulidad del despido, que su representado fue víctima de despido injustificado, y que, por ende, se le adeudan las prestaciones indicadas, condenando a la demandada a pagar las sumas señaladas en el cuerpo de su presentación, todo lo anterior con los reajustes e intereses que por Ley corresponda, con costas.



SEGUNDO: Que, con fecha 8 de septiembre de 2021, comparece **ALFREDO ALEJANDRO CHAPARRO URIBE**, abogado, cédula nacional de identidad N° 10.367.563-4, en representación de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO**, ambos domiciliados en avenida Las Cruces N° 401, comuna de El tabo, contestando la demanda, negando y controvirtiendo de forma expresa todas y cada una de las afirmaciones vertidas en ella, solicitando que rechace la misma en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Sostiene que la demanda no puede prosperar, toda vez que la contratación pública no puede devenir bajo circunstancia alguna en una relación de carácter laboral, de conformidad al principio de legalidad.

Refiere, como cuestión previa a la oposición de excepciones y la contestación del fondo de la demanda, que se debe tener presente que la controversia ventilada manifiesta un claro problema de legalidad.

Explica que su representada, la Ilustre Municipalidad de El Tabo es, de acuerdo a la Ley Orgánica N°18.695, una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio, a quien le corresponde la administración de una o varias comunas. Indica que tal órgano debe sujetar su actuar al principio de juridicidad, debiendo con ello actuar previa habilitación -legalidad atributiva- pero dentro de su competencia y sin más atribuciones o potestades que las que le confiera el ordenamiento jurídico; es decir, la actuación de la administración opera una vez habilitada, pero la vinculación a la legalidad va más allá. Sostiene que, en efecto, dentro de dicha habilitación sólo podrá realizar aquello a lo que expresamente se le ha autorizado.

Señala que como todo ente público, las Municipalidades solamente pueden realizar aquello a lo que expresamente se les ha facultado -por



disposición legal-, y que todo acto o actuación que se realice fuera del encuadramiento legal -mediante el cual debe someter su actuar-, tiene un efecto, y dicho efecto es la nulidad de tal acto, esto, con las sanciones y responsabilidades correspondientes, sanciones que van desde el orden administrativo, -perseguir algún tipo de responsabilidad administrativa-, hasta el orden civil, como sería el caso de que si dicho acto -realizado fuera del marco legal- genera algún tipo de perjuicio, debe ser resarcido -dicho perjuicio-, mediante la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual correspondiente.

Indica que el principio de legalidad se encuentra materializado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile, normas que cita.

Señala que el demandante acciona en contra de un organismo público, regido en cuanto a su funcionamiento y mecanismos de contratación, por las normas del Derecho Administrativo, y que conforme a lo anterior, pesa sobre dicho organismo el principio de legalidad, conforme al cual la Administración Pública no puede actuar por autoridad propia, sino que ejecutando actos contenidos en la Ley vigente.

Expone que la Administración tiene el deber de actuar conforme se lo señala la Ley, es la Ley la que le fija todo un marco a su actuación, especialmente en ciertas materias donde la ley enmarca a la Administración, obligándole según lo señala su texto.

Refiere que por ello, surge una interrogante: ¿puede un organismo público -como un Municipio- contratar a un "trabajador" conforme a las normas de la legislación laboral?. Sostiene que la respuesta es negativa -salvo en casos excepcionales-, e indica que los actos y contratos que pueden ser



celebrados por las Municipalidades se encuentran explícitamente consagrados en la legislación vigente, no existiendo posibilidad de que una Municipalidad, en este caso, de El Tabo, pueda por regla general proceder a la contratación laboral de un funcionario a honorarios.

Afirma que por ello una contratación administrativa a honorarios no puede devenir en contratación laboral como lo pretende el actor, toda vez que dicho organismo se encuentra impedido de proceder a este tipo de contrataciones. En este sentido, sostiene que la Ley N°18.883, que crea el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, es palmario al señalar que las Municipalidades contarán con una dotación de planta, y también podrá conformar dicha dotación cargos a contrata; luego en su Artículo 4° señala que podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos, así como la prestación de servicios específicos, para finalmente señalar el inciso final de dicho artículo que dichas contrataciones a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. Expone que en consecuencia, concluyente es que al no serle aplicables las normas del Código del Trabajo, dada la naturaleza de su relación con la Municipalidad de El Tabo, es que no proceden las indemnizaciones de naturaleza laboral solicitadas por el señor Camerati.

Hace presente, a modo ejemplar, que si un prestador a honorarios de cualquier Municipalidad con relación civil vigente, solicita al Tribunal que se declare -por medio de un procedimiento declarativo- que su relación civil o funcionaría según el caso posee carácter laboral, dicha Municipalidad se vería impedida de contratar a dicha persona conforme a la legislación laboral al exceder aquello de las normas administrativas. Así, sostiene que por más que un Tribunal lo declare, existiría una imposibilidad legal de dar cumplimiento a dicha sentencia, añadiendo que lo anterior resulta completamente relevante,



toda vez que la legislación administrativa -Ley N°18.883- contempla únicamente la contratación a honorarios, el personal a contrata y el personal de planta, siendo legalmente improcedente que se determine la existencia de una relación de carácter laboral.

Así, añade que resulta relevante que el Tribunal considere que, atendido el ámbito restrictivo de la legislación administrativa -bajo la cual se circunscribe el actuar de su representada-, resulta imposible, improcedente e ilegal que se determine la existencia de una relación laboral entre ésta y cualquier persona natural.

Añade que la ley ha autorizado a las municipalidades la celebración de contratos de trabajo en forma especialísima, sólo respecto de dos situaciones, a saber: 1. Actividades transitorias en municipalidades que cuenten con balnearios u otros semejantes, añadiendo que tal es el caso, pues su representada, la Municipalidad de El Tabo, ejerce precisamente la administración de una comuna y ciudad-balneario; y 2. Personal de servicios traspasados del sector público, específicamente en lo que se refiere a los trabajadores de la salud y educación, que corresponden a la Dirección de Salud Municipal y a la Dirección de Educación Municipal.

Afirma que, por lo tanto, no existe ninguna otra posibilidad para el municipio, por expresa disposición de la Ley, para contratar a personas por la vía de la celebración de un contrato de trabajo, siendo las únicas hipótesis viables, contrataciones de servicios de carácter transitorio, para en este caso poder cubrir necesidades específicas en un momento determinado, como ha hecho su mandante. Refiere que sostener lo contrario implicaría que su representada, en tanto corporación de derecho público y órgano de la administración, estaría actuando fuera de sus facultades legales, lo que resulta inaceptable.



Refiere que, en conclusión, no puede pretender el actor que se reconozca una relación laboral en todos los períodos que prestó servicios a honorarios, ya que esa situación jurídica pretendida es constitucional y legalmente inaceptable.

Opone la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal, solicitando que esta magistratura se declare incompetente para conocer del asunto, conforme lo disponen los artículos 420, 432 y 453 y siguientes del Código del Trabajo, de conformidad a los antecedentes de hecho y derecho que pasa a exponer; ello, en relación a que resulta legalmente imposible que su representado proceda a la contratación laboral de personas naturales conforme al carácter restrictivo de la contratación administrativa, según lo ya expuesto.

Señala que lo expuesto implica que los hechos que pretende discutir el actor en estos autos, no se encuadran en ninguna de las hipótesis del artículo 420 del Código del Trabajo que regula aquellas circunstancias en las cuales el Tribunal es competente absolutamente para conocer y juzgar; añadiendo que por consiguiente, este Tribunal deberá declarar su incompetencia absoluta en razón de la materia discutida.

Añade que el vínculo que unió al demandante con su representada es única y exclusivamente una relación a honorarios para labores específicas, todo lo cual se cumplió de acuerdo a los términos pactados por las partes.

Afirma que la relación del actor con su representado se rige única y exclusivamente conforme a las normas establecidas para dichas contrataciones en el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, Ley N°18.883, resultando del todo impertinente se pretenda otorgar "calidad laboral" a una relación a honorarios, que posee plena validez y respecto de la cual se establecen normas para su procedencia y aplicación. Sostiene que la relación



existente entre su representada y la demandante de autos tuvo todas y cada una de las circunstancias exigidas por la legislación para ser calificada como una contratación a honorarios.

Luego, opone la excepción de falta de legitimidad activa del demandante y pasiva de su representado.

Indica que la acción intentada por la contraparte es improcedente, al carecer del derecho para obtener la satisfacción de la pretensión contenida en aquella, atendidas las consideraciones vertidas a propósito de la fundamentación de la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal.

Refiere que en dicha exposición ha quedado claramente establecido que el demandante y la Ilustre Municipalidad de El Tabo, se encontraban unidos por un vínculo de naturaleza civil, siendo contratado a honorarios para funciones específicas. Refiere que estas relaciones son propias del ámbito del Derecho Público Administrativo y no, como la contraria alega, un contrato de trabajo.

Aduce que, en efecto, el demandante fue también contratado de acuerdo al régimen de honorarios a partir de las fechas que se expone, -teniendo cada una de las relaciones a honorarios sus particularidades- prestando servicios no habituales para este servicio -de diversa naturaleza- y accidentales en cuanto a su duración-; es decir, que entre el señor Camerati y la Municipalidad de El Tabo, nunca existió un contrato de trabajo ni menos una relación de tipo laboral sujeta al artículo 7° del Código del Trabajo, por lo que es absolutamente improcedente la acción impetrada.

Refiere que de lo anterior fluye entonces, que la Municipalidad de El Tabo carece de legitimación pasiva, pues no detenta el carácter de "empleador" respecto del demandante, y que de la misma lógica deriva que el



demandante carece de legitimación activa, pues no tiene la calidad de "trabajador" conforme al régimen laboral.

Aduce que, sin perjuicio de las excepciones opuestas y con el propósito de hacer efectivo el derecho a la defensa de su parte, contesta la demanda derechamente, refiriendo que aquella debe ser rechazada en todas sus partes, por las consideraciones que pasa a exponer.

Indica que en lo que respecta a los hechos de la demanda, y para todos los efectos pertinentes, en particular respecto de las normas que rigen el peso de la prueba, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo, su parte niega, desconoce y expresamente controvierte por completo todos y cada uno de los hechos de que se contienen en el libelo pretensor, sus fundamentos y todas las pretensiones económicas reclamadas.

Así, sostiene que niega tajantemente: i.- Que durante el periodo en que el actor de autos prestó servicios a honorarios, estas prestaciones hayan sido una relación de carácter laboral con vínculo de subordinación y dependencia regida por el Código del Trabajo; ii. Que durante la época en que el actor fue contratado a honorarios, haya tenido la calidad de trabajador y su representada de empleador; iii. Que el actor haya prestado servicios "estables, permanentes, esenciales, fundamentales e indispensables" para la estructura jerárquica de su representada; iv. Que la relación entre las partes, cuando tuvo contrato a honorarios, se constituyera por elementos propios de un contrato de trabajo, como estar sujeto a "poder de mando", o a un "deber de obediencia" y en general a todo indicio relativo a una relación laboral; v. Que se haya producido un despido injustificado, toda vez que no existe una relación laboral entre las partes, por lo cual no existió en ningún caso la obligación de su representada de dar término al contrato por la vía formal de la emisión de una carta de despido, lo anterior en primer término porque la relación contractual



es una de prestación de servicios, la que además era a plazo, es decir, por una duración determinada. Indica que por estas consideraciones, su parte sostiene que lo que realmente puso fin a su contrato fue un acto voluntario de la demandante.

Continúa, señalando que niega así también: vi. La procedencia de las prestaciones laborales reclamadas; vii. Que la Ilustre Municipalidad de El Tabo adeude al actor las prestaciones demandadas; y viii. La procedencia del pago de cotizaciones previsionales y de salud, en tanto como señala el actor, su contratación es de carácter civil, a través de un contrato de honorarios, añadiendo que si llegase a determinarse la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, su representada jamás ha retenido suma alguna de dinero por tales conceptos -pago de cotizaciones-, por tanto, no corresponde que se paguen dichas prestaciones.

Señala que, como ya fuera expuesto con anterioridad, la demanda intentada no puede prosperar toda vez que entre el demandante y la Ilustre Municipalidad de El Tabo, no existe una relación del tipo laboral, regulada por las disposiciones del Código del Trabajo y normas complementarias; ello, toda vez que la demanda escapa del ámbito laboral y resultan ser aplicables las normas del contrato de honorarios al término de la relación contractual, siendo jurídicamente imposible -en el ámbito administrativo- que su representado convenga relaciones de carácter laboral, con la sola excepción ya mencionada, en tanto es una ciudad-balneario, que ocasionalmente puede celebrar contratos de plazo fijo, para la realización de servicios transitorios, lo que, afirma, no es el caso.

Expone que en el caso particular del demandante, resulta plenamente aplicable aquello dispuesto en el ya citado artículo 4° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y que dable es concluir,



entonces, que conforme a la legislación citada, las prestaciones a honorarios se rigen por las normas que las partes han establecido en el correspondiente acuerdo contractual, siendo aplicables, en subsidio, las normas del Código Civil.

Afirma que con el fin de analizar la procedencia en este tipo de contratación en el caso de marras, no resulta pertinente analizar la existencia de los denominados "indicios de laboralidad", sino la existencia de labores accidentales, no habituales, o para cometidos específicos. A este respecto insiste en que la contratación del actor se subsume a dichas hipótesis, siendo plenamente ajustada la contratación adquirida entre las partes.

Indica, respecto a la existencia de subordinación, que la Ilustre Municipalidad de El Tabo, en virtud de habilitación legal expresa, se vio en la necesidad de recurrir a este tipo de contrataciones para satisfacer la función pública que se encuentra llamada a cumplir. Sostiene que lo anterior no es baladí, dado que sobre su representada pesa el deber de ajustar su actuar conforme a las normas y criterios que impone el principio de legalidad.

Explica que la contratación a honorarios del señor Camerati responde al desembolso de recursos públicos por parte de la administración a fin de satisfacer una necesidad pública, valiéndose de servicios técnicos y/o profesionales para tal objetivo.

Expone, respecto de la existencia de funciones no habituales y genéricas, que los servicios contratados con el demandante se circunscribieron a dichas características, de acuerdo a lo que los respectivos contratos a honorarios suscritos, así como las solicitudes de contratación indican, siendo plenamente aplicable el artículo 4° de la Ley N°18.883, y (sic) procedente la



exclusión de la legislación laboral en el caso de marras. En efecto, sostiene que decidores resultan ser determinados antecedentes.

Señala, en primer lugar, que los servicios prestados por el actor eran renovados periódicamente de acuerdo a la necesidad de ejecución de determinados y puntuales necesidades de servicio, lo que da cuenta del cometido específico, no habitual, y lo accidental de sus servicios.

Manifiesta que, sin perjuicio de que la parte demandante se enfoca en el análisis de los llamados indicios de laboralidad, resulta completamente compatible la existencia de una relación a honorarios no laboral regida y amparada por el estatuto administrativo con la de elementos de laboralidad como marcaje de asistencia, entre otros. Afirma que así lo ha dispuesto la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en fallo causa Rol N° 131-2019.

Respecto al primer elemento de la supuesta laboralidad o subordinación y dependencia de sus servicios, la existencia de un horario determinado en el cual debían prestar sus funciones, indica que se debe tener presente que, siendo el contrato de honorarios un sistema de contratación regulado por el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, es perfectamente lícito y lógico la posibilidad de que el acreedor de los servicios pueda establecer un determinado horario en el cual se ejecuten los servicios pactados, sin que por ese hecho deba aplicarse supletoriamente el Código del Trabajo.

A este respecto, utilizando idéntico argumento, refiere que el actor afirma que, en la práctica, durante el tiempo en que prestó funciones cumplió una jornada regular, distribuidas de lunes a viernes, lo cual, a juicio de la contraria, constituirían indicios de laboralidad.



Añade, respecto a la existencia de subordinación, que la Ilustre Municipalidad de El Tabo, en virtud de habilitación legal expresa, se vio en la necesidad de recurrir a este tipo de contrataciones para satisfacer la función pública que se encuentra llamada a cumplir. Aduce que lo anterior no es baladí, dado que sobre su representado pesa el deber de ajustar su actuar conforme a las normas y criterios que impone el principio de legalidad.

Señala que en el análisis que realiza no es posible perder de vista que la contratación de este tipo de servicios apunta a la consecución del interés público y el bien común, donde el producto del servicio ejecutado pasará a formar parte del patrimonio público con miras al cumplimiento de dicho interés o finalidad. De este modo, señala que la dirección o supervisión de cualquier clase sólo representa el cumplimiento de las labores que la Ley les ha encomendado como Administración, a través de sus encargados y funcionarios, para velar por el cumplimiento de un fin público, observando el principio de eficiencia y eficacia por que debe velar la Administración del Estado.

Hace presente que para la satisfacción de las necesidades colectivas de manera regular y continua, la Ley asigna a los órganos de la Administración del Estado recursos financieros, que exigen la rendición de cuentas, dotados de periodicidad y la exigencia de ciertos estándares y cumplimiento de los fines públicos que se tuvieron en vista al momento de la elaboración de cada proyecto y/o programa.

Indica que las exigencias de eficiencia y eficacia como obligaciones jurídicas implican sujeción al control jerárquico al que deben someterse las autoridades administrativas y los funcionarios públicos cuando ejercen sus funciones, dentro del ámbito de sus competencias, lo que se extiende no sólo al clásico control de legalidad, sino que comprende dentro de éste al control de



oportunidad y específicamente al control sobre la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines y objetivos legalmente establecidos para la organización en su conjunto.

En este sentido, señala que la contratación a honorarios del demandante, responde al desembolso de recursos públicos por parte del Municipio a fin de satisfacer una necesidad pública valiéndose de servicios técnicos y/o profesionales para tal objetivo, razón por la cual el servicio tiene el deber de velar por la ejecución de las labores indicadas en los respectivos contratos de honorarios, primero a fin de verificar la ejecución de la obligación de hacer por parte de la demandante, y en segundo lugar, a fin de dar cumplimiento a la función pública que se le ha encomendado. Explica que, por estas razones, en caso alguno la supervisión en la ejecución del contrato de honorarios en ningún caso constituye un indicio de subordinación laboral, sino que muy por el contrario, responde al correcto ejercicio de la función pública que la Municipalidad de El Tabo debe observar en sus funciones, dando estricto cumplimiento a la legislación administrativa que rige su actuar.

Afirma, en relación a la acción de despido injustificado efectuado por la demandante, que su parte sostiene su total improcedencia en el caso de marras, no siendo aplicable por tratarse esta de una institución propia del derecho del trabajo, en circunstancias que la relación existente entre la actora y su mandante, se funda en un contrato de honorarios, esto es, regido por las normas civiles, razón por la cual solicita su total rechazo.

Indica, respecto a la nulidad del despido, que tal como se ha indicado, no es procedente que se acojan las acciones incoadas contra su representada, por cuanto ellas se fundan en la existencia de una relación laboral previa, lo que en el caso de marras no ocurre.



Añade que, en el improbable evento que se declare la existencia de una relación laboral, es menester tener en consideración lo que ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema, en fallo de unificación reciente, sentencia Rol 1541-2019, que cita.

Expone que por estas consideraciones, es que la figura de nulidad laboral no es aplicable a la hipótesis del caso de marras, por lo que dicha pretensión deberá ser rechazada.

Agrega, respecto a las prestaciones demandadas, en cuanto a la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización por años de servicio y el recargo legal, que insiste en que resulta improcedente, ilegal y antijurídico que una contratación como funcionario público, así como una contratación a honorarios para servicios específicos -aun en presencia de "indicios de subordinación y dependencia"- derive en una relación de carácter laboral. Aduce que de la mano de lo anterior, niega la procedencia en el pago de las indemnizaciones pretendidas, así como del recargo legal.

Manifiesta, que el pago de las cotizaciones previsionales, como bien lo sabe el actor de autos, eran una carga de su parte, en consideración a la naturaleza del contrato suscrito entre las partes, esto es de honorarios profesionales, y que durante la época en que existió relación laboral, estas se pagaron íntegramente, por lo que de existir cotizaciones, estas se deben reducir al plazo no prescrito.

Hace presente que, sin perjuicio de las excepciones previamente opuestas, resulta improcedente el pago de cotizaciones previsionales -por parte de su representado-, por: (i) la inexistencia de una relación de carácter laboral; (ii) la improcedencia de la prestación, atendidas las consideraciones particulares de no retención de emolumentos previsionales.



Alega por su parte, la improcedencia de la prestación, al no haber existido retención por parte de la Municipalidad de El Tabo. Refiere que para la procedencia del pago de cotizaciones previsionales, se requiere necesariamente una prestación de servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, y que de esta forma, si el principal punto de controversia del presente juicio dice relación precisamente con la naturaleza de la relación existente entre las partes, va a ser la sentencia de autos la que establezca dicha naturaleza, por lo que no procede aplicar una sanción cuando su representada no ha pagado jamás una remuneración, cuando no existe contrato de trabajo, no pudiendo por consiguiente, efectuar el pago de cotizaciones.

Razona, por su parte, que la demandada jamás realizó retención alguna en cuanto a sus emolumentos, -más que el 10% de cada boleta de honorarios emitida, según franquea la ley para este tipo de tributos, cantidad de dinero- impuesto que fue devuelta en cada año respectivo-; es decir, el prestador de servicios a honorarios, recibió de forma íntegra el 100% de sus ingresos, por lo que, afirma, no se distingue un monto bruto y un monto líquido en cuanto a sus haberes mensuales.

Sostiene que condenar a su representado al pago de cotizaciones, dejaría al actor en una situación mejorada respecto a otro tipo de trabajadores, discriminándolos en cuanto a sus relaciones contractuales se trata, toda vez que -el actor de autos- habría recibido el 100% de su -supuesta remuneración-, más un -eventual- pago de cotizaciones. Añade que no se debe olvidar que el pago de las cotizaciones, si bien es carga del empleador, el dinero para ello es únicamente del trabajador, pues deriva de los descuentos legales que se materializan en cada liquidación, y que incluso, es por ello, la existencia de una sanción tan drástica como la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, conocida como la "nulidad de despido", ya que en términos simples



el empleador está haciendo una apropiación indebida respecto a los dineros de sus dependientes.

Manifiesta que en el caso de autos, su representado jamás ha realizado retención de dinero alguno en cuanto a los ingresos del actor durante la época que mantuvo contrato de honorarios, por lo que pagarle cotizaciones previsionales y de salud serían un verdadero enriquecimiento sin causa para él, y un empobrecimiento para su representada; e indica que por ello para el hipotético caso de que llegase a acogerse la demanda de autos, necesariamente habrá que fijar una remuneración bruta y una líquida, y el actor de autos entregar la cantidad de dinero correspondiente a los descuentos legales, a fin de que su representada proceda a dicho pago. Afirma que, además, como se señaló, establecer esta obligación previsional a una entidad pública en el marco de relaciones que tienen como fundamento una contratación a honorarios, requiere un pronunciamiento judicial previo que declare la existencia de una relación laboral, y en circunstancias que la relación anterior se encontraba amparada por una presunción de legalidad, se deja en desventaja a los organismos públicos, pues estos no contarían con la facultad que tiene el empleador de "convalidar el despido", con anterioridad a la declaración de la nulidad del mismo, grabando al mismo de forma desigual.

Sostiene que, atendida la naturaleza contractual entre las partes, y los argumentos ya expuestos, en concreto la inexistencia de una relación laboral, su parte niega rotundamente adeudar cualquiera de estos conceptos a la parte demandante, ya sea feriado proporcional, feriado legal, así como días de trabajo adeudados, no existiendo deuda alguna por concepto de vacaciones ni remuneraciones.

Añade que, en subsidio de las defensas y alegaciones opuestas y formuladas por su parte y ante el caso de que se estimare procedente el pago



de alguna indemnización y prestación demandada, opone la excepción de compensación en relación a cualquier monto a que fuera condenada en definitiva el Municipio a pagar al demandante, considerando las devoluciones de impuestos percibidas por él por impuestos pagados por su representado y que, para el improbable caso que se determine la existencia de una relación laboral, no habría tenido el derecho a percibir.

Manifiesta que, en efecto, conviene recalcar nuevamente que el demandante de autos, aceptando la relación contractual civil, emitió durante todo el periodo en que estuvo vinculado a su representado una serie de boletas de honorarios, respecto de las cuales la Municipalidad de El Tabo practicó la respectiva retención del 10% del valor de cada una de ellas, en cumplimiento de la normativa tributaria; sumas que, en definitiva, fueron totalmente reintegradas a su patrimonio en las operaciones de renta de los respectivos períodos.

Indica que, de declararse por parte del Tribunal, que esta es una relación laboral propiamente tal, el actor de autos no habría tenido derecho alguno a la devolución de impuestos, -respecto al monto retenido por parte de su representada-, sino por el contrario, el descuento legal, y monto retenido necesariamente habría sido utilizado para el pago de las cotizaciones de salud y seguridad social, cosa que hoy el actor de autos, pretende que sea carga única y exclusivamente de su representado.

Solicita tener por contestada la demanda de autos en los términos expuestos en el cuerpo de su presentación, y, en su oportunidad acoger la excepción de incompetencia absoluta, falta de legitimidad opuestas y/o las excepciones, alegaciones y/o defensas de fondo interpuestas en su contestación, y en definitiva rechazar las demandas entabladas en todas sus partes, con expresa condena en costas.



TERCERO: Que, a la audiencia preparatoria, ambas partes concurrieron debidamente representadas. Tras la relación somera de la demanda y de la contestación de la misma, se confirió traslado a la demandante de las excepciones de incompetencia, de falta de legitimación activa y pasiva y de compensación.

Evacuando el traslado conferido, respecto de la excepción de incompetencia absoluta, la parte demandante solicitó su rechazo con costas, toda vez que, según indica, existe ya bastante jurisprudencia al respecto, que ha señalado que efectivamente son competentes para conocer de estas materias, en las cuales una persona natural demanda a un organismo estatal, o a una Municipalidad, por entender que efectivamente en la realidad existe un contrato de trabajo. Reitera que son competentes para conocer de esa materia los Tribunales de Justicia en cuanto a los tribunales laborales. Se cuestiona porqué existe esta especie de opinión aceptada respecto de la materia, e indica que porque efectivamente lo que piden en la demanda es que se declare una relación laboral, y justamente esa petición concreta, que va a fijar la Litis del juicio debe ser conocida por un Tribunal de Letras del Trabajo. Afirma que no puede ser posible que una demanda en la que se pida (sic) la petición de una relación laboral, sea conocida por ejemplo por la Contraloría o por un Tribunal Civil.

Indica que señalar lo contrario claramente obsta con una serie de normas constitucionales y orgánicas también. Cita el fallo Rol N°34.846-2016 de la Excelentísima Corte Suprema, donde, según refiere, también en un recurso de unificación de jurisprudencia la parte demandante solicita se declare si es competente o no para conocer de estas materias, respecto a un funcionario que había prestado labores a honorarios formalmente pero que en la práctica demandaba la relación laboral, y justamente lo que hace la Corte en



ese fallo es acoger el recurso y señalar que el hecho que la contraparte, en este caso un servicio estatal, haya basado su defensa en que para ellos esto es una relación civil o un contrato a honorarios, no priva a la jurisdicción del imperio a que efectivamente la obliga el artículo 7 de la Constitución de la República, porque como esta ha sido requerida, le incumbe y es obligación decidir al juez laboral en este caso, en la sentencia de fondo a qué tipo de relación de trabajo se encontraban subsumidas las partes; por lo tanto, reitera, son competentes señala la Corte en ese fallo para conocer.

Añade que además, pensar lo contrario y sostener que no son competentes para conocer de esta materia obsta también con lo señalado en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, y también se estaría incurriendo en un prejuzgamiento.

Expone que ha señalado la Corte que efectivamente estos fallos vienen a eludir el mandato de inexcusabilidad de los Tribunales que está establecido en el artículo 76 de la Carta fundamental y el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, por lo tanto solicita se rechace la excepción de incompetencia con costas.

Indica que en el mismo sentido, evacúa el traslado respecto de la falta legitimación activa y pasiva deducida por la contraparte, también solicitando su rechazo, porque en el mismo sentido de la excepción de incompetencia, se deduce la misma lógica para señalar que existiría, o no serían legítimos activos y pasivos la parte demandante y demandada respectivamente. Refiere que claramente esa será una decisión que finalmente tendrá que señalar el juez del fondo mediante las pertinentes audiencias preparatoria y de juicio, pero claramente según la teoría del caso de su parte, el que hace las veces de empleador, el que firmó los contratos, el que pagó en este caso las boletas de honorario o las remuneraciones, como quiera decirse, es efectivamente la



Municipalidad, y por otro lado al que prestaba servicio y al que le pagaban estas remuneraciones era su representado, por lo tanto ambos se encuentran en la calidad de, por una parte la legitimación pasiva, y por otra parte su representado se encuentra en la calidad de poder demandar a la Municipalidad, por lo tanto, en el mismo sentido de la excepción de incompetencia solicita se rechace la falta de legitimación activa y pasiva con costas.

Expone finalmente, en cuanto a la última excepción que es la excepción de compensación, considerando que esa excepción más bien es una alegación de fondo que hace la contraparte en su contestación en el caso de que efectivamente se acoja la demanda, solicita también se rechace por el juez del fondo, en el caso que se acoja ésta en la sentencia, toda vez que si se considera lo que establece el artículo 41 del Código del Trabajo, el concepto de remuneración debe entenderse que el descuento del 10% efectivamente fue parte de la remuneración íntegra que debió recibir su representado durante todos estos años trabajados para el municipio, por lo tanto no puede ser objeto de compensación de ninguna manera porque no es un crédito de ninguna forma que le pertenezca a la Municipalidad, por lo tanto no lo puede oponer en esta instancia como compensación para efecto de aminorar el pago al que fuera eventualmente condenado, por lo que solicita se rechace tal excepción.

CUARTO: Que, efectuado el llamado a conciliación, proponiendo el Tribunal las bases de arreglo, ésta no prosperó, por lo que se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos a probar los siguientes:

1.- Existencia de relación laboral entre las partes, vigencia y condiciones de la misma.

En la afirmativa del hecho anterior:



2.- Término de la relación laboral existente entre las partes, causal y antecedentes que lo justifican.

3.- Remuneración pactada.

4.- Efectividad que la parte demandada otorgó el feriado que se demanda o lo compensó en dinero.

5.- Efectividad de ser procedente la excepción de compensación deducida.

QUINTO: Que la parte demandante ofreció en la audiencia preparatoria y rindió en la audiencia de juicio, la siguiente prueba:

Documental:

1.- Fotografías de contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos entre el actor y la Ilustre Municipalidad de El Tabo, de las siguientes fechas: 25 de enero y 14 de abril de 2016, 30 de enero de 2017, 18 de enero y 16 de febrero (anexo) de 2018, 21 de enero de 2019, 05 de febrero de 2020, y 22 de enero de 2021.

2.- Fotografía del decreto alcaldicio N°343, de fecha 04 de febrero de 2016.

3.- Fotografía del decreto alcaldicio N°283, de fecha 07 de febrero de 2017.

4.- Fotografía del decreto alcaldicio N°252, de fecha 24 de enero de 2018.

5.- Fotografía del decreto alcaldicio N°512, de fecha 19 de febrero de 2018.



6.- Fotografía del decreto alcaldicio N°218, de fecha 25 de enero de 2019.

7.- Fotografía del decreto alcaldicio N°443, de fecha 07 de febrero de 2020.

8.- Fotografía del decreto alcaldicio N°410, de fecha 04 de febrero de 2021.

9.- Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor, con cargo a la Ilustre Municipalidad de El Tabo, números 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 y 22, todas del año 2016.

10.- Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor, con cargo a la Ilustre Municipalidad de El Tabo, números 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36 y 38, todas del año 2017.

11.- Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor, con cargo a la Ilustre Municipalidad de El Tabo, números 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 50 a la 54, todas del año 2018.

12.- Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor, con cargo a la Ilustre Municipalidad de El Tabo, números 55 a la 58, 60 a la 64 y 66 a la 68, todas del año 2019.

13.- Boletas de honorarios electrónicas emitidas por el actor, con cargo a la Ilustre Municipalidad de El Tabo, números 70 a la 76, 78, 79, 81, 82 y 83, todas del año 2020.

14.- Boleta de honorarios electrónica emitida por el actor, con cargo a la Ilustre Municipalidad de El Tabo, número 85, correspondiente al año 2021.



15.- Fotografía de documento cometido funcionario emitido por el actor, de fecha 12 de diciembre de 2018.

16.- Fotografía del oficio N°374, de fecha 10 de diciembre de 2018.

17.- Fotografía de memorándum N°99, de fecha 04 de abril de 2019.

18.- Fotografía de memorándum N°73, de fecha 22 de junio de 2018.

19.- Fotografía del documento denominado formulario solicitud de reclamo emitido con fecha 3 de junio de 2019.

20.- Fotografía de credencial institucional del actor.

21.- 2 fotografías del actor, participando en actividades del equipo municipal.

Absolución de posiciones:

Atendida la incomparecencia del representante legal de la demandada, a solicitud de la parte demandante se hace efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo.

Testimonial:

Declara el testigo José Vicente Medina Zúñiga, Rut 8.110.672-K, informático, nacido en Santiago el 19 de marzo del año 1958, de 63 años de edad, soltero, domiciliado en calle Las Baleares N°1354, Las Cruces, El Tabo.

A la pregunta sobre quién es el demandante, y como lo conoce, señala que porque trabaja en la Municipalidad, es compañero de trabajo hace muchos años, 2016 más o menos, trabajaba en el departamento social de la Municipalidad de El Tabo.



Preguntado sobre qué hacía el señor Camerati en el departamento social de la Municipalidad de El Tabo, responde que él es asistente social de profesión, entonces trabajaba en el departamento social atendiendo a las personas que iban a requerir distintas ayudas desde el municipio.

Preguntado sobre, en qué consiste esa atención y esas diferentes ayudas que da el municipio, responde, por ejemplo gente que va a solicitar pasajes para viajar a Valparaíso o Santiago por distintas situaciones, que no tiene los medios para hacerlo, ayuda para sus casas, alimentos a veces, él no trabaja ahí pero sabe más o menos que son esas cosas las que solicitan, la ayuda que solicita la gente, la ayuda social.

Expone que trabaja en el municipio desde el año 2007. Preguntado desde cuándo se hacen ayudas sociales en la Municipalidad, señala que entiende que siempre se ha hecho. Sostiene que hoy en día se hacen ayudas sociales en la Municipalidad también.

A la pregunta sobre, dónde se encontraba trabajando físicamente el señor Camerati, responde que a lo menos él está haciendo trabajo telemático, entonces están cambiadas las oficinas en este momento, físicamente, pero el demandante trabaja en una oficina que había del departamento social, donde ahí acudía la gente y se le entrevistaba de forma personal y privada para ver qué problemas tenían y él las ayudaba con lo que se podía.

A la pregunta, sobre en qué horario trabajaba el señor Camerati en la oficina para atender gente, responde que el entraba a las 8:30 y salía a las 5:30 de lunes a jueves, y los viernes salía a las 4:30, y la atención de público era durante la mañana, hasta la 1 cree.

Señala que ese horario se registraba marcando la tarjeta, marcando la entrada y salida.



Preguntado sobre cómo se organizaba el Departamento Social en términos jerárquicos, responde que el departamento social depende de DIDECO, y en el social está a cargo una persona que a su vez dependía de la directora o director de DIDECO que había en el momento.

Señala que DIDECO es el departamento de Dirección de Desarrollo Comunitario, y ahí hay una jefatura, y el departamento social o la oficina social depende de DIDECO, y en esa oficina social también hay una jefatura, que es el jefe o jefa directa de don Pedro Camerati, o era.

Preguntado sobre cómo sabe y cómo le consta que era la jefa, responde porque están en el diagrama de la Municipalidad, porque él manejaba la página de transparencia, y ahí está el diagrama y todos los cargos que hay en la Municipalidad, además que el hecho de trabajar hartos años ahí él sabe quién es jefe y quién no, o que cargo ocupan todas las personas, no podría no saberlo.

Señala que el señor Camerati contaba, físicamente para trabajar en el departamento, con lo que cuentan la mayoría de las personas que ocupan un cargo así, o sea un computador, un escritorio, un asiento, y las herramientas que el necesite o información que debe necesitar para su trabajo puntual. Afirma que ese computador, escritorio y herramientas se las proveía el Municipio.

Preguntado sobre cómo sabe que eran del Municipio, responde que uno no lleva esas cosas de la casa, si uno va a trabajar a un lugar, o a un trabajo privado o fiscal es esa empresa la que le otorga las herramientas para poder desempeñar esa labor.

A la pregunta sobre qué beneficios tenía don Pedro por trabajar en la Municipalidad, responde que él tenía un contrato de honorarios, pero en el



caso de la Municipalidad de El Tabo normalmente los contratos a honorarios no tienen beneficio, pero en el caso de la Municipalidad se le había otorgado algunos beneficios por una cuestión de dignidad y para equiparar con los demás funcionarios, entonces tenían algún aguinaldo para fiestas patrias y navidad, algunos días de vacaciones, derecho a algunos días de licencia en caso de alguna enfermedad y días administrativos, no sabe la cantidad pero sabe que se hacía con los funcionarios que estaban a honorarios al menos bastante tiempo.

Señala que se imagina que su jefatura directa le autorizaba las vacaciones al señor Camerati. Indica que no tiene información con respecto a quién desarrolla las funciones de don Pedro hoy en día, porque no está yendo en estos momentos físicamente al municipio, entonces no sabe quién está ahí o cuantas personas hay.

Afirma que desconoce cuáles son los requisitos para que se le pague el honorario o el sueldo al señor Camerati porque él no está a honorarios. Añade que generalmente la gente que está a honorarios da un informe mensual de las tareas que ha realizado, entonces ahí se debe comprobar si se cumplió con la labor por la cual está contratado. A la pregunta, sobre a quién debía emitir el señor Camerati ese informe mensual, responde que él entiende que ese se entrega a su jefatura directa y debe ser revisado por el departamento de control.

Añade que no sabe qué día se pagan los honorarios en la Municipalidad.

Indica que no conoce las circunstancias del término de la prestación de servicios de don Pedro. Recuerda que él estuvo un momento, en el momento del cambio de administración, y él estuvo un momento, se contagió de Covid-19 en un momento dado; y se mejoró después y después lo echaron, o sea no



le renovaron el contrato; añade que entonces a él eso le pareció injusto porque lo conoce, lo ha visto a él al menos trabajar como profesional y sabe que es muy eficiente y tiene mucha vocación para atender a las personas y para ayudar, entonces fue como una, fue injusto.

Preguntado si sabe en qué fecha pasó esto, responde que no recuerda la fecha exacta, que debe haber sido a fines del año pasado, el año pasado debe haber sido.

A la pregunta si don Pedro hacía otras funciones en la Municipalidad además de asistente social, responde que sabe que él participaba también en entrega de cajas de mercadería, le parece que estuvo ayudando, otras labores que no son estrictamente funciones de él, porque eso lo hacían mucho, muchas veces, que salían por ejemplo, ahora en el caso de la pandemia que había que salir a ayudar y repartir cosas y participar en la entrega de cosas y él ayudaba en eso, que no eran de sus funciones.

Señala que recuerda que vio al señor Camerati en algunas actividades que se hacían para los adultos mayores, un acto musical y había que estar ayudando ahí a las personas a entrar y él estaba ahí, cree que el también participó en repartir mercadería, pero eso es lo que él recuerda, porque a todos les tocaba siempre hacer ese tipo de labores que eran como extras.

Preguntado sobre quién era el que ordena que hagan esas funciones extras, responde que se imagina que en el caso de él debe haber sido la directora o el director de DIDECO, que es el jefe superior, porque DIDECO es el que está más cerca de lo que es la ayuda a los ciudadanos.

Exhibición de documentos:

El demandante incorpora:



1.- Contratos y/o convenios suscritos entre el actor y la I. Municipalidad de El Tabo, debidamente visados, durante el periodo que va desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021.

2.- Decretos o resoluciones en donde se aprueba la contratación entre el actor y la I. Municipalidad de El Tabo, durante el periodo que va desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021.

3.- Libro de control de asistencia o registro de asistencia en el cual constan la entrada y salida del actor, correspondientes al periodo que va desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021.

Así también, al no haber sido exhibidos por la demandada, y a solicitud del demandante, se hace efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, respecto de los informes de gestión mensual, trimestral, semestral y/o anual, emitidos por el actor y visados por la jefatura de la I. Municipalidad de El Tabo, correspondientes al periodo que va desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de enero de 2021.

SEXTO: Que, por su parte, la demandada ofreció en la audiencia preparatoria y rindió en la audiencia de juicio, la siguiente prueba:

Exhibición de documentos:

La demandada incorpora:

Boletas de honorarios emitidas por el demandante por el período trabajado.

SÉPTIMO: Que, una vez concluida la rendición de la prueba, la parte demandante procedió a observarla en los términos del registro de audio.



OCTAVO: Que el demandante pretende que existió una relación laboral entre las partes, iniciada el día 1 de enero de 2016, y que se habría extendido, de forma continua, hasta el día 31 de enero del año 2021. Sostiene que, si bien fue contratado en virtud de una serie de contratos de honorarios, en realidad estos fueron contratos de trabajo, ejerciendo para la demandada las funciones de asistente social en el departamento social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, cargo que, según sostiene, es evidentemente genérico, no accidental y habitual en la organización jerárquica de la Municipalidad, encontrándose en el desempeño de sus funciones sujeto a jornadas de trabajo claramente establecidas, bajo el poder de mando de sus superiores, y afecto al deber de obediencia.

A raíz del vínculo laboral alegado, demanda se declare la existencia de una relación laboral continua con la demandada entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2021. Alega así también, que el despido del que fue objeto es injustificado, de lo cual deriva el pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo por \$775.845, la indemnización por años de servicio por la suma de \$3.879.225, y el recargo del 50%, equivalente a la suma de \$1.939.612; además de demandar el pago de feriado proporcional por \$32.326, y la suma de \$2.741.319 a título de feriado legal, los que según afirma, no le fueron otorgados ni compensados en dinero.

Así también, alega la nulidad del despido, atendido que no se le habrían pagado las cotizaciones de seguridad social durante todo el tiempo que prestó servicios para la demandada, demandando el pago de tales cotizaciones durante toda la vigencia de la relación laboral, así como las que se deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162° del Código del Trabajo, denominada Ley Bustos, a razón de su última remuneración mensual.



Por su parte, comparece la demandada negando categóricamente la totalidad de los hechos señalados por el actor en su demanda, controvirtiendo la existencia de una relación laboral entre las partes, la procedencia de las prestaciones laborales y de seguridad social demandadas, la nulidad del despido, así como las demás indemnizaciones y prestaciones que señala el actor en su demanda.

Aduce que el vínculo que unió a las partes fue de carácter civil, correspondiente a una prestación de servicios a honorarios, regulada por el mismo contrato y supletoriamente por las normas del derecho común, por lo que la condición del demandante era la de un contratante civil. Deduce la excepción de incompetencia absoluta del tribunal, sosteniendo que resulta legalmente imposible que su representado proceda a la contratación laboral de personas naturales conforme al carácter restrictivo de la contratación administrativa, por lo que los hechos que pretende discutir el actor no se encuadran en ninguna de las hipótesis del artículo 420 del Código del Trabajo.

Deduce también la excepción de falta de legitimidad pasiva de su mandante, toda vez que afirma que la Municipalidad de El Tabo no detenta el carácter de empleador respecto del demandante, y que de la misma lógica deriva que el demandante carece de legitimación activa, pues no tiene la calidad de trabajador, conforme al régimen laboral.

Finalmente, en subsidio de las defensas y alegaciones opuestas y formuladas, opone la excepción de compensación, en relación a cualquier monto a que fuera condenado en definitiva el municipio a pagar al demandante, considerando las devoluciones de impuestos percibidas por él por impuestos pagados por su representado y que, para el caso que se determine la existencia de una relación laboral, no habría tenido el derecho a percibir.



NOVENO: Que, tenidos a la vista los fundamentos de las excepciones de incompetencia absoluta del tribunal y de falta de legitimidad activa y pasiva, deducidas por la demandada, se evidencia que el sustento de ambas excepciones no es otro sino la negación de haber existido entre las partes una relación laboral, la que a su vez constituye el fundamento mismo de la acción deducida por el actor.

En consecuencia, fundándose las excepciones, en último término, en la existencia misma de un vínculo de carácter laboral entre las partes, hecho controvertido en autos, y por tanto objeto de prueba, resulta necesario que dichas excepciones, de acuerdo a la propia naturaleza de su fundamentación, sean analizadas conjuntamente con el fondo del asunto controvertido.

DÉCIMO: Que, no existiendo controversia entre las partes, resultan ser hechos de la causa los siguientes:

- 1.- Que el demandante prestó servicios para la demandada.
- 2.- Que durante el tiempo que se prestaron los servicios la demandada no pagó las cotizaciones previsionales del demandante.

UNDÉCIMO: Que, atendido el tenor de las alegaciones formuladas por las partes, y teniendo a la vista la prueba consistente en los documentos denominados "Contrato de prestación de servicios a honorarios", de fechas 25 de enero de 2016, 14 de abril de 2016, 30 de enero de 2017, 18 de enero de 2018, 21 de enero de 2019, 05 de febrero de 2020 y 22 de enero de 2021 se evidencia, en un primer acercamiento, que las partes habrían contratado en uso de la facultad establecida por el artículo 4° de la Ley N°18.883, que al efecto dispone: *"Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la*



municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto".

En este sentido, y atendidos los términos en que se ha trabado la contienda en autos, lo relevante será entonces, determinar si la demandada obró en el uso legítimo de esas facultades o no, es decir, si cumplió con los requisitos indicados en la norma citada para la contratación de servicios a honorarios.

A tal efecto, cabe destacar que, al ser la Ley N°18.883 una norma especial en relación al derecho común de los trabajadores, contenido en el Código del Trabajo, su aplicación debe ser preferente a la de éste, lo que en concreto implica que, más allá de la subordinación y dependencia del vínculo, lo relevante será, en un primer momento, el cumplimiento de las hipótesis o requisitos que autorizan a este tipo de contratación por la Municipalidad, en cuyo caso el vínculo obligacional se encontrará regido por el mismo contrato, como señala el inciso final del artículo transcrito.

Por otra parte, en caso de determinarse que la demandada no obró en legítimo uso de esas facultades, por no cumplirse las hipótesis normativas que autorizan esa contratación, deberá analizarse, entonces, la relación entre las partes a la luz del derecho común, haciéndose relevante en tal caso la



subordinación y dependencia en la relación, en los términos de los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo.

DUODÉCIMO: Que, asimismo, en orden a una adecuada resolución del asunto controvertido, este tribunal tendrá por acreditado, en mérito de la prueba rendida en autos, que entre las partes se suscribió una serie de contratos a honorarios, que abarcan los siguientes periodos:

- Desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
- Desde el 4 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.
- Desde el 2 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021.

Así se observa del mérito conjunto de la prueba documental consistente en los documentos denominados contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 25 de enero de 2016, y Decreto Alcaldicio N°343 de fecha 4 de febrero de 2016, contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 14 de abril de 2016, y Decreto Alcaldicio N°1194 de fecha 25 de abril de 2016 –allegado por el demandante como parte de la exhibición de documentos-, contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 30 de enero de 2017, y Decreto Alcaldicio N°283 de fecha 7 de febrero de 2017, contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 18 de enero de 2018, contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 21 de enero de 2019, y Decreto Alcaldicio N°218 de fecha 25 de enero de 2019, contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 05 de febrero de 2020, y Decreto Alcaldicio N°443 de fecha 07 de febrero de 2020, contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 22 de enero de 2021, y Decreto Alcaldicio N°410 de fecha 04 de febrero de 2021.

En este sentido, sin perjuicio de los períodos que comprenden los contratos de prestación de servicios a honorarios celebrados entre las partes



indicados precedentemente, habiendo alegado el actor la existencia de una vinculación ininterrumpida entre aquél y la demandada de autos, que abarcaría las fechas de inicio y término de la relación contractual existente entre aquellas; se tendrá como un hecho de la causa, al tenor del apercibimiento contenido en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo, hecho efectivo respecto de la demandada, al no haber comparecido su representante legal a absolver posiciones habiendo sido legalmente emplazada, que entre las partes existió una relación contractual ininterrumpida, que se prolongó desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de enero de 2021; alegación que, al tenor del apercibimiento antes señalado, se presume efectiva.

Así también, en concordancia con lo que se ha venido concluyendo, obra en autos la prueba documental consistente en las 61 boletas de honorarios, emitidas por el actor a la demandada, I. Municipalidad de El Tabo, -acompañadas tanto por el demandante como parte de la prueba documental, como por la demandada en virtud de la prueba de exhibición de documentos- correspondientes a los números 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83 y 85, que comprenden en forma ininterrumpida el período alegado por el actor como aquel durante el cual se mantuvo vigente la relación contractual existente entre las partes, que media entre el mes de enero del año 2016 y enero del año 2021.

Finalmente, es necesario hacer presente que, corrobora de igual forma lo que se ha concluido, el mérito del Decreto Alcaldicio N°252 de fecha 24 de enero de 2018, toda vez que, si bien de los contratos de prestación de servicios a honorarios de fecha 30 de enero de 2017 y 18 de enero de 2018, la contratación del actor en el período a que dichos contratos refieren, habría



finalizado el 31 de diciembre de 2017, para luego ser contratado nuevamente a contar del día 4 de enero del año 2018, lo cierto es que del mérito del decreto alcaldicio antes individualizado, se desprende que se dispuso la contratación del actor a partir del día 1 de enero de aquel año -2018-, es decir, de forma ininterrumpida por todo el período que comprenden dichos contratos, desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre del año 2018.

DÉCIMOTERCERO: Que, respecto de las características específicas de la vinculación contractual habida entre las partes, se tendrá por acreditado:

1.- Que, en el contexto de dicha vinculación, el demandante se obligó a prestar diversos servicios personales en favor de la demandada, los cuales, al tenor de los contratos de prestación de servicios, consistieron, entre otros, en prestar apoyo profesional para el departamento social y los diversos programas y actividades dependientes de la DIDECO, la atención de público, evaluación y seguimiento de casos ORASMI, postulación de becas municipales, elaboración de memos y oficios, elaboración de certificados sociales, elaboración de informes sociales, participación en actividades municipales y otras funciones encomendadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Por su parte, contribuye al establecimiento del hecho que se ha tenido por acreditado, los asertos del testigo José Medina, quien al ser consultado por las funciones que desempeñaba el actor, al respecto afirma que este debía realizar otras funciones además de aquellas propias de su cargo de asistente social, añadiendo que recuerda haberlo visto participando en algunas actividades que se hacían para los adultos mayores, en la que prestó ayuda.

2.- Que, por su parte, la demandada se obligó a pagar, por estos servicios, una contraprestación en dinero.



En efecto, a ello refiere la cláusula tercera de los documentos denominados contrato de prestación de servicios a honorarios, de fecha 25 de enero y 14 de abril de 2016, que disponen el pago al prestador de servicios a honorarios, de la suma de \$666.667; contratos de prestación de servicios a honorarios de fechas 30 de enero de 2017, y 18 de enero de 2018, por la suma de \$688.000; contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 21 de enero de 2019, por la suma de \$734.873; contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 05 de febrero de 2020, por la suma de \$756.919; contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 22 de enero de 2021, por la suma de \$775.845; y finalmente, el documento anexo de contrato de prestación de servicios de fecha 16 de febrero de 2018, que indica “*se pagará al prestador de servicios los honorarios mensuales*” por la suma de \$772.400 por el período desde el 1 al 28 de febrero de 2018, y la suma de \$705.200, por el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018.

Así también, corrobora lo que se viene concluyendo las 61 boletas de honorarios individualizadas en el considerando duodécimo de la presente sentencia, emitidas en forma periódica e ininterrumpida por el actor a la demandada, desde enero del año 2016 al mes de enero del año 2021.

3.- Que, en el cumplimiento de sus obligaciones, el demandante debía dar cumplimiento a las órdenes e instrucciones emanadas de su jefatura.

Tal hecho se tiene por acreditado por cuanto, al no haber comparecido el representante legal de la demandada a absolver posiciones sin causa justificada, el hecho en análisis se obtiene al haberse hecho efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo, por lo que las alegaciones hechas por el demandante, en orden a que en el marco de la prestación de servicios para la demandada se encontró bajo el poder y mando, y deber de obediencia de ésta, recibiendo instrucciones de parte de



doña María Jesús Gálvez, doña Carolina Fuentes Navarro, jefa del Departamento Social, doña Mónica Navarro y doña Cleria García, directora de la DIDECO, estando sujeto en todo momento a la observancia de estas, tanto al inicio como al término del turno de trabajo, se presumen efectivas.

4.- Que el demandante se encontraba obligado a rendir cuenta del trabajo que ejecutaba.

En este sentido, cabe destacar lo dispuesto en los documentos denominados contratos de prestación de servicios a honorarios, de fechas 14 de abril de 2016, 30 de enero de 2017, 18 de enero de 2018, 21 de enero de 2019, 05 de febrero de 2020, 22 de enero de 2021, y del anexo de contrato de prestación de servicios de fecha 16 de febrero de 2018, en los que se establece expresamente el deber del actor de presentar por medio de la oficina de partes del municipio, y previa visación de la Dirección de Desarrollo Comunitario, un informe mensual dando cuenta y conformidad de la ejecución de los servicios contratados.

Así las cosas, del mérito de los referidos contratos, se obtiene que el pago de los honorarios pactados se encontraba condicionado, no solo a la presentación, sino también a la visación de los referidos informes por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario; circunstancia que da cuenta fehacientemente de la efectividad del hecho en análisis, en orden a que se configuró como un presupuesto para el pago de los honorarios convenidos, la presentación de dichos informes, quedando de manifiesto de esa forma, el deber que recaía en el demandante en orden a rendir cuenta de las labores desempeñadas.

A su vez, tal hecho se tiene por acreditado al haberse hecho efectivo, respecto de la demandada, el apercibimiento dispuesto por el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, en relación con los informes de gestión mensual,



trimestral, semestral y/o anual emitido por el actor y visados por la jefatura correspondiente de la I. Municipalidad de El Tabo, correspondientes al período que va desde el 1 de enero de 2016 al 31 de enero de 2021. En consecuencia, al no haber exhibido la demandada los informes requeridos, y tratándose éstos de documentos que deben obrar en su poder, se estima probada, en atención al apercibimiento hecho efectivo a este respecto, la alegación realizada por la parte demandante, en el sentido de que la demandada exigió al actor, antes de efectuar el pago de la remuneración mensual, la confección de informes de gestión, dando cuenta de las funciones desarrolladas por aquel durante el período correspondiente a la mensualidad señalada en la boleta, y por el período a que hace referencia el apercibimiento, esto es, desde el 1 de enero de 2016 al 31 de enero de 2021.

Finalmente, y en cuanto a la prueba testimonial rendida en autos se refiere, si bien no es posible tener por acreditado el hecho en análisis con el solo mérito de los asertos del testigo José Medina, toda vez que al ser preguntado sobre los requisitos que debía cumplir el señor Camerati para el pago de su sueldo u honorario, señala desconocerlo, complementa su respuesta añadiendo que *“generalmente la gente que está a honorarios da un informe mensual de las tareas que ha realizado, entonces ahí se debe comprobar si se cumplió con la labor por la cual está contratado”*, afirmación que viene a corroborar que en los hechos los trabadores a honorarios, dentro de los que se encontraba el actor, debían emitir tales informes mensuales dando cuenta del trabajo realizado.

5.- Que el actor se encontraba sujeto a la obligación de cumplimiento de cargas horarias o jornadas semanales de trabajo.

El hecho en análisis se ha tenido por acreditado, de conformidad al mérito conjunto, tanto del contrato de prestación de servicios a honorarios de



fecha 25 de enero de 2016, en el que se establece expresamente, en su cláusula segunda, el deber de cumplimiento por parte del demandante, de un *“horario de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 y viernes de 08:30 a 16:30”*, como de los contratos de prestación de servicios a honorarios de fechas 18 de enero de 2018, 21 de enero de 2019, 05 de febrero de 2020 y 22 de enero de 2021, de los que se evidencia que el demandante de autos, funcionario de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se encontraba sujeto a la *“marcación de reloj”*, debiendo registrar un *“cumplimiento –de- un total de 176 horas mensuales”*; y finalmente, del mérito de los registros de asistencia que obran en autos y que formaron parte de la prueba de exhibición de documentos.

En efecto, corrobora el hecho que se ha tenido por acreditado, el mérito de tales registros, por cuanto, abarcando en toda su extensión la vigencia de la relación obligacional existente entre de las partes, dan cuenta de igual forma el deber de cumplimiento de un horario de trabajo establecido, al que se encontraba afecto el demandante en el cumplimiento de sus funciones para la demandada, evidenciándose un constante registro tanto de su hora de ingreso como de salida, y que se condice con aquel alegado por el actor en su libelo pretensor.

De conformidad al mérito de los documentos analizados, se tiene por acreditado que en los hechos el demandante se encontraba obligado al cumplimiento de una jornada de 176 horas mensuales de trabajo, y sujeto a un horario, distribuido de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas, y los días viernes de 8:30 a 16:30 horas.

A su vez, tal hecho se tiene por acreditado por cuanto, al no haber comparecido el representante legal de la demandada a absolver posiciones sin causa justificada, el hecho en análisis se obtiene al haberse hecho efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo, por lo



que las alegaciones hechas por el demandante, en orden a que en el marco de la prestación de servicios para la demandada debió cumplir una jornada de trabajo que se distribuía de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas, se presumen efectivas.

Finalmente, corrobora lo anterior la prueba testimonial rendida en autos.

En este sentido es claro el testigo José Medina al afirmar que el señor Camerati tenía un horario de trabajo, según el cual el actor *“entraba a las 8:30 y salía a las 5:50 de lunes a jueves, y los viernes salía a las 4:30”*.

Por su parte, no obsta a lo que se ha venido concluyendo, el mérito de los contratos de prestación de servicios a honorarios de fecha 14 de abril de 2016 y 30 de enero de 2017, toda vez que, si bien el primero de ellos no hace referencia alguna a un deber de cumplimiento de jornada horaria, y el segundo señala expresamente que el demandante no debía realizar una marcación de reloj, de forma tal que podría entenderse a primeras luces que durante el período de vigencia de dichos contratos el demandante no se encontró afecto al cumplimiento de una jornada de trabajo establecida, de la prueba ya analizada, en especial de los registros de asistencia exhibidos por la demandada, se obtiene que en los hechos aquello si ocurrió, resultando evidente que en efecto, en los períodos de tiempo que comprenden dichos contratos – años 2016 y 2017-, el actor si debió realizar una marcación horaria, tanto al inicio como al término de la jornada, debiendo por tanto cumplir con la jornada horaria alegada.

6.- Que el cumplimiento de la carga horaria o jornada semanal, era controlado por la demandada.

Tal hecho, se ha tenido por acreditado con el mérito de los registros de asistencia allegados en autos, incorporados por el demandante como exhibición de documentos, los que dan cuenta fehacientemente de la



efectividad de la alegación hecha por el actor en tal sentido, en orden a que el cumplimiento de la jornada horaria a que se encontraba afecto, era controlado por la demandada por medio de la marcación de un reloj control.

Por su parte, corrobora también el hecho que se ha tenido por acreditado, el mérito de la prueba testimonial rendida en autos, al afirmar el testigo José Medina, que el horario de trabajo que debía cumplir el actor “*se registraba marcando la tarjeta*”, tanto a la entrada como a la salida de la jornada.

DÉCIMOCUARTO: Que, atendida la descripción de las funciones que el actor debía desempeñar, según fue referido, se concluye que no resulta posible calificarlas como constitutivas de "labores accidentales", ni como "cometidos específicos", al tenor de lo dispuesto por el artículo 4 de la ley N°18.883, que autoriza a las municipalidades a contratar sobre la base de honorarios.

En efecto, la enunciación de las funciones que el actor debía desempeñar, de acuerdo a los contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos entre las partes, así como de los asertos del testigo José Medina, abarcan cometidos de contenido tan variado o general como lo son prestar apoyo profesional para el departamento social y los diversos programas y actividades dependientes de DIDECO, atención de casos, atención de público, elaboración de informes sociales, visitas domiciliarias con fines diagnósticos, *participación en actividades municipales, y otras funciones encomendadas por la dirección de desarrollo comunitario*, debiendo participar en actividades que además no eran propias de su cargo, como por ejemplo, actividades destinadas al adulto mayor.

En este orden de ideas, resulta evidente que, más allá de los enunciados conforme a los cuales las partes pudieran haberse referido a las funciones



contratadas, de la prueba documental que obra en autos, y de la declaración del testigo presentado por el actor, se obtiene que, en los hechos, éste se encargaba de la realización de múltiples tareas propias del quehacer municipal, debiendo además participar en actividades propias del municipio, y que no se condecían con su rol de asistente social. En este sentido, no basta con que, en los contratos respectivos, se pretenda realizar una mención de funciones más o menos "específicas", -sin dejar de lado, por lo demás, la enunciación genérica de algunas de las funciones desempeñadas- si éstas a su vez se multiplican y diversifican en su texto y en los hechos, toda vez que ello desnaturaliza el carácter específico de los cometidos encargados, dejando de manifiesto que estos obedecen, en realidad, a las características propias de un trabajo de carácter general, no susceptible, por tanto, de encuadrarse en la primera hipótesis dispuesta por el artículo 4° de la Ley N°18.883, para justificar la modalidad de contratación a honorarios, empleada con el demandante.

La misma diversidad de funciones, por otra parte, y la falta de referencia, tanto en los decretos alcaldicios y contratos de trabajo, como en las alegaciones y pruebas rendidas por las partes, a alguna circunstancia de hecho referencial, que justifique calificar a los servicios desempeñados por el actor como accidentales, impide tener por configurada la segunda hipótesis legal de la contratación a honorarios.

Así también, se debe tener especial consideración el tiempo durante el cual el actor desempeñó funciones para la demandada, esto es, por más de cinco años, lo que reafirma el carácter habitual y no específico ni accidental de sus tareas, y la necesidad permanente de la Municipalidad demandada de disponer de las diversas prestaciones por parte del demandante, cuestión que permite valorar esas funciones como algo bastante más permanente y



necesario que el cometido específico o las labores accidentales tratadas en el artículo 4 de Ley N°18.883. En efecto, no resulta plausible sostener que pueda existir un cometido específico o accidental que se diversifica y extiende en el tiempo, y que es encargado a un mismo prestador de servicios, sin que, por lo demás, haya existido solución de continuidad alguna durante todo el tiempo que las partes se mantuvieron vinculadas contractualmente.

Todo lo hasta acá analizado y razonado permite concluir que el cometido pactado y desempeñado por el actor no configura ninguna de las circunstancias que, de conformidad con la Ley N°18.883, facultan la contratación sobre la base de honorarios.

DECIMOQUINTO: Que, de este modo, habiéndose concluido que la demandada ha obrado fuera de los supuestos legales del artículo 4 de la Ley N°18.883, deberá analizarse si los servicios prestados por el demandante pueden considerarse como de una relación de carácter laboral, en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, estatuto aplicable como norma al obrar la demandada fuera de la regulación especial.

DÉCIMOSEXTO: Que, atendido lo precedentemente expuesto, al tenor de los hechos consignados en los considerandos duodécimo y décimo tercero de la presente sentencia, se tendrá por acreditado que la relación obligacional existente entre las partes, reviste efectivamente las características de una relación laboral.

En efecto, y al margen de la denominación que las partes hayan podido otorgar a los diversos contratos suscritos por ellas, lo cierto es que, en los hechos, se desarrolló un vínculo obligacional continuo en el tiempo, que se extendió desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2021; que en el desarrollo de sus obligaciones, el actor se encontraba sujeto a las órdenes e instrucciones de sus superiores jerárquicos, a quienes debía rendir cuenta



periódica de su gestión en orden a hacerse acreedor de la remuneración pactada; que el trabajo se desarrollaba en el contexto de una jornada semanal obligatoria, y que el cumplimiento de dicha jornada era objeto de control por parte de la demandada.

Tales características e indicios de la relación obligacional existente entre las partes, ameritan su calificación como una relación de carácter laboral, al tenor de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo.

DÉCIMOSÉPTIMO: Que así las cosas, en cuanto a la excepción de incompetencia absoluta del tribunal y las excepciones de falta de legitimidad activa y pasiva, opuestas por el demandado en el escrito de contestación de la demanda, en mérito de lo razonado en el considerando inmediatamente precedente, en orden a haberse determinado, en mérito de la prueba que obra en autos, la efectividad de haber existido entre el actor y la demandada una relación laboral; y, considerando que el fundamento último de ambas excepciones no es otro sino la inexistencia de un vínculo laboral que una a las partes, no cabe sino desestimar dichas excepciones, desestimando de este modo las alegaciones que en este punto vertió la parte demandada, al haberse tenido por acreditado que efectivamente existió un vínculo laboral entre empleador y trabajador que habilita la interposición de la demanda de autos.

DECIMO OCTAVO: Que, dicho lo anterior, corresponde pronunciarse acerca de las circunstancias en que tuvo lugar el despido sufrido por el actor.

Al efecto, de conformidad al artículo 454 N°1 del Código del Trabajo, corresponde al demandado acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.



Sin embargo, atendido el mérito de autos, y en concordancia con el hecho de que la demandada ha negado la existencia de una relación laboral entre las partes, basada en la circunstancia de que nunca existió entre éstas una relación de dicho carácter, sino una de naturaleza civil, en base a los contratos de honorarios suscritos, resulta que tampoco ha allegado antecedente probatorio alguno respecto de los hechos en que fundó el despido, por lo que sólo cabe concluir que el despido de que ha sido objeto el actor el día 31 de enero de 2021, es improcedente.

DECIMONOVENO: Que, en cuanto a la indemnización solicitada por el demandante, se establece que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 del Código del Trabajo, la última remuneración mensual del actor, asciende preliminarmente a la suma de \$776.561.

Tal suma se tiene por acreditada con el mérito de las últimas 3 boletas de honorarios emitidas por el actor a la demandada, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2020, y el mes de enero del año 2021.

En efecto, las remuneraciones que constan en dichos documentos, correspondientes a los 3 últimos meses trabajados por el actor para la demandada, ascienden a las sumas de \$796.919, \$756.919 y \$775.845 respectivamente; razón por la cual, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 172 del Código del Trabajo, se tiene por acreditado que la última remuneración del actor ascendió preliminarmente al promedio de dichas remuneraciones, esto es, a la suma de \$776.561.

No obstante, habiendo el actor restringido su pretensión a la suma total de \$775.845 por concepto de última remuneración, y en mérito del principio de congruencia procesal, se estará al monto reclamado.



VIGÉSIMO: Que, habiéndose establecido que el despido de que fue objeto el demandante ha sido improcedente, la demandada será condenada al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, por un monto total de \$775.845, según se señalará en lo resolutivo del fallo.

Consecuencialmente, en cuanto a la indemnización por años de servicios solicitada por el demandante, habiendo trabajado éste para la demandada durante 5 años y 1 mes, se dará lugar a ella por la suma de \$3.879.225 (tres millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos veinticinco pesos), con un recargo del 50%, de conformidad a la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo, ascendente a la suma de \$1.939.612.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, respecto de los feriados demandados, el actor sostuvo que la demandada le adeuda, por concepto de feriado legal, la suma de \$2.741.319, correspondiente a 106 días (5 años), y por concepto de feriado proporcional la suma de \$32.326, correspondiente a 1,25 días.

En este sentido, es necesario hacer presente que la obligación de otorgar feriados o de compensarlos en dinero, constituye un imperativo de orden legal, pesando sobre el demandado la carga procesal de acreditar su otorgamiento o su pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, carga con la que no ha cumplido, atendido el tenor de su teoría del caso.

Así, se concluye que la demandada adeuda al demandante el pago íntegro de los días de feriado devengados en favor de éste. En este orden de ideas, en mérito de las fechas de inicio y término de la relación laboral que se han tenido por acreditadas en autos, se obtiene que el trabajador prestó servicios para la demandada por un período de 5 años y 1 mes. Dicho lo anterior, computados los días de feriado adeudados, a continuación de la fecha de despido, y excluyendo sábados, domingos y festivos -por cuanto el actor habría podido disponer de tales días, en caso de que el feriado le hubiera sido



otorgado en forma legal-, se obtiene un total de 107,25 días de feriado legal y proporcional; y, habiéndose establecido que la última remuneración del actor asciende a la suma de \$775.845, se obtiene por concepto de feriados legal y proporcional la suma de \$2.773.645.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a continuación, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la acción de nulidad de despido por no pago de cotizaciones previsionales.

Al respecto, cabe señalar y reiterar que no existió controversia entre las partes respecto del hecho de que el demandado no pagó las cotizaciones previsionales del demandante durante toda la relación contractual, -hechos reconocidos expresamente por la demandada en el escrito de contestación de demanda-, pues ambos coinciden en que la relación contractual habida entre ellos se sujetó, desde el punto de vista formal, a los términos de un contrato de prestación de servicios a honorarios.

En este orden de ideas, la demandante funda su acción en mérito de lo dispuesto en el artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo, en cuanto establece que, para proceder al despido de un trabajador, el empleador debe informarle por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen.

Los incisos 5° y siguientes del citado artículo 162 del Código del ramo, buscan asegurar que el empleador cumpla con su obligación de enterar las cotizaciones previsionales del trabajador, y, en caso de existir incumplimiento, que pague aquellas antes del despido, bajo riesgo de ser condenado a la gravosa sanción contemplada en la parte final del inciso 5° del artículo 162, consistente en el pago de las remuneraciones del trabajador hasta la convalidación del despido.



La norma que contempla esta sanción tiene como sujeto activo de esa infracción laboral al empleador, quien en conocimiento de su obligación de retener y pagar las cotizaciones previsionales, no lo realiza en forma voluntaria y decide despedir al trabajador estando aún en incumplimiento.

Sin embargo, no puede considerarse que la Municipalidad demandada se encuentre en una situación análoga a la del empleador, que incurre en tal incumplimiento, por cuanto, si bien una vez declarada la existencia de la relación laboral entre las partes, éste se encontrará obligado a pagar las cotizaciones correspondientes a ese tiempo, resulta evidente que, al momento de la contratación del demandante, no buscaba burlar la ley, sino que actuaba en el marco regulatorio que la rige - al menos al sujetar la contratación en su inicio a una de las posibilidades legales-.

La hipótesis sancionatoria de la nulidad de despido por no pago de cotizaciones previsionales se refiere a aquel empleador particular que, pudiendo libremente contratar a honorarios o bajo relación laboral, sin las trabas o imperativos legales que obligan el actuar del órgano público, opta sin embargo por la primera alternativa, con el objeto de burlar la legislación y obligaciones laborales, y obtener ahorros patrimoniales no autorizados por la ley.

En consecuencia, la demandada, sobre quien se ha pedido hacer efectiva la sanción referida, no es realmente el sujeto a quien se encuentra dirigida la sanción.

En efecto, la demandada no se encontraba facultada para contratar al actor en los términos previstos en el artículo 7 del Código del Trabajo, pues aquello no está contemplado en el Estatuto de los Funcionarios Municipales y sólo llega a declararse judicialmente al determinarse que ha obrado fuera de



las facultades de ese Estatuto Especial, al ser ésta la única posibilidad legal para determinar la naturaleza de la relación entre estas partes.

En definitiva, no resulta posible subsumir la situación del demandado de autos, en la figura del sujeto activo de la infracción del inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, atendidas las sustanciales diferencias entre la hipótesis planteada en estos autos, respecto de aquella que ha pretendido regular la norma citada, relativa al empleador que siempre pudo y debió contratar por vía laboral al trabajador y cumplir esa obligación de pagar cotizaciones previsionales, e ilegalmente no lo ha realizado, de modo que sea compelido a hacerlo mediante la amenaza de esta importante sanción para revenir la conducta.

Además, cabe tener presente lo que, en esta materia, ha sostenido la Excma. Corte Suprema, mediante sentencia dictada con fecha 12 de junio de 2018 en recurso de unificación de jurisprudencia, autos de Reforma Laboral N° 42.636-2016, al disponer: *"Décimo: Que, en efecto, como esta Corte ya manifestó en procesos anteriores (v.gr. ingresos número: 37.266-17, 41.500-17 41.760-17), no obstante sostenerse la procedencia de la punición que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo cuando es la sentencia del grado la que reconoce la existencia de la relación laboral, atendida su evidente naturaleza declarativa, que lleva a concluir que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral, en el caso específico en que el demandado corresponde a un organismo público que se vinculó con el trabajador afincado en una norma estatutaria, esta Corte modificó su postura, pues, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado - entendida en los*



términos del artículo 1° de la ley 18.575-,concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Por otro lado, la aplicación en estos casos de la sanción en referencia se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

Undécimo: Que, por lo razonado, no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, lo que en caso alguno no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral.

De tal manera, la sentencia del grado se mantiene incólume en todo lo resuelto, salvo en lo relativo al punto en referencia, conforme se dirá en la parte dispositiva de este fallo".

Por los motivos señalados, no se hará lugar a la acción de nulidad del despido deducida en contra de la demandada, según se señalará en lo resolutivo del fallo.



VIGÉSIMO TERCERO: Que, respecto de las cotizaciones previsionales que el demandante alega como adeudadas; teniendo en consideración lo establecido en el motivo decimosexto de esta sentencia, en orden a haberse determinado la existencia de una relación laboral entre las partes; y, al haber sido un hecho pacífico de autos, que el demandado no enteró las cotizaciones previsionales del actor durante la vigencia de la relación contractual existente entre ellas, se dará lugar a la acción entablada, debiendo la demandada enterar en las instituciones previsionales respectivas, las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía correspondientes al actor, por todo el periodo trabajado. En este sentido, no se atenderá la alegación de la demandada consistente en señalar que resulta improcedente condenarla al pago de las cotizaciones previsionales, fundada en el hecho de no haber retenido las cotizaciones previsionales al demandante, durante toda la vigencia de la relación contractual existente entre ambas, y que dicho pago constituiría un enriquecimiento sin causa para el demandante, toda vez que el artículo 3° de la Ley N°17.322, dispone expresamente que se presume de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere el artículo 2° de la norma citada, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores, y que, si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden.

Así también, no se atenderá la alegación de la demandada, en orden a que resulta improcedente condenarla al pago de las cotizaciones previsionales, sosteniendo que si el principal punto de controversia del presente juicio dice relación precisamente con la naturaleza de la relación existente entre las partes, va a ser la sentencia de autos la que establezca dicha naturaleza, es decir, que se requiere de un pronunciamiento previo que declare la existencia de la relación laboral, gozando la relación anterior –a honorarios- de



presunción de legalidad, toda vez que la naturaleza jurídica del pronunciamiento jurisdiccional en relación con la existencia de la relación laboral, es de carácter declarativo, y no constitutivo de la misma.

Por su parte, en este mismo orden de ideas, y a mayor abundamiento, se encuentra la sentencia de fecha 12 de junio de 2018, en recurso de unificación de jurisprudencia, autos de Reforma Laboral N° 42.636-2016, la que, negando lugar a la nulidad del despido cuando la demandada es un órgano de la Administración del Estado, señaló que aquello *“no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas, por el período en que se reconoció la existencia de la relación laboral”*.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, respecto a la excepción de compensación deducida, evidenciándose, en mérito de lo expuesto por el demandado al momento de formularla, que no se verifican los elementos de procedencia de la misma previstos por el legislador, de conformidad a lo establecido en el artículo 1656 del Código Civil, toda vez que la demandada no ha precisado en forma alguna el monto al que asciende la obligación que pretende compensar, ni su base de cálculo, por lo que, no siendo ésta una obligación líquida, forzoso resulta el rechazo de la misma.

VIGÉSIMO QUINTO: Que la restante prueba no altera lo concluido precedentemente, por cuanto el documento Decreto Alcaldicio N°512 de fecha 19 de febrero de 2018 en nada aporta a lo razonado, al hacer referencia al contrato de prestación de servicios a honorarios de fecha 16 de febrero de 2020, que no fue acompañado en autos.

Lo mismo ocurre con los documentos consistentes en fotografía de credencial institucional del actor, fotografía del documento cometido funcionario de fecha 12 de diciembre de 2018, fotografía del oficio N°374 de fecha 10 de diciembre de 2018, fotografía de memorándum N°99 de fecha 4



de abril de 2019, fotografía del memorándum N°73 de fecha 22 de junio de 2018, y fotografía del formulario solicitud de reclamo de fecha 3 de junio de 2019, toda vez que no se refieren directamente a ningunos de los puntos de prueba fijados por el tribunal, razón por la cual sólo se mencionan para los efectos procesales pertinentes.

Finalmente, en nada modifica lo concluido, las dos fotografías del actor participando en actividades del equipo municipal, toda vez que de ellas no se advierte la fecha en que fueron tomadas, el lugar, así como tampoco la actividad que se habría estado desarrollando, y finalmente, quienes participaron de aquella, sin que pueda por tanto otorgársele mérito probatorio alguno al tenor de los hechos controvertidos en autos.

VIGÉSIMO SEXTO: Que las probanzas han sido valoradas conforme a las normas de la sana crítica, sin contradecir los principios de la lógica ni las máximas de la experiencia, correspondiendo acreditar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o éstas, según lo prescrito en los artículos 456 del Código del Trabajo y 1698 del Código Civil.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 69, 420, 432, 446 y siguientes, 456 del Código del Trabajo; artículo 4° de la ley N°18.883, artículo 3 inciso segundo de la Ley 17.322; artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y 1698 del Código Civil, **SE DECLARA:**

En cuanto a las excepciones deducidas:

I.- Que se rechazan las excepciones de incompetencia absoluta, de falta de legitimación activa y pasiva y la excepción de compensación deducidas por la demandada.

En cuanto a la demanda de declaración de relación laboral:



II.- Que ha lugar a la demanda interpuesta por don Pedro Antonio Camerati Acevedo, en contra de la demandada Ilustre Municipalidad de El Tabo, representada legalmente por don Alfonso Muñoz Aravena y, por tanto, se declara que entre las partes existió una relación laboral continua e ininterrumpida, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2021.

En cuanto a la demanda por despido injustificado:

III.- Que ha lugar a la demanda interpuesta por Pedro Antonio Camerati Acevedo, condenándose en consecuencia a la demandada, Ilustre Municipalidad de El Tabo, representada legalmente por don Alfonso Muñoz Aravena, ejecutoriada que sea la presente sentencia, al pago de las siguientes sumas:

a) A la suma de \$775.845.- por concepto de indemnización sustitutiva por falta de aviso previo.

b) A la suma de \$3.879.225.- por concepto de indemnización por años de servicio.

c) A la suma de \$1.939.612 por concepto de recargo del 50%.

En cuanto a la demanda de cobro de prestaciones:

IV.- Que ha lugar a la demanda interpuesta por don Pedro Antonio Camerati Acevedo, condenándose en consecuencia a la demandada, Ilustre Municipalidad de El Tabo, representada legalmente por don Alfonso Muñoz Aravena, ejecutoriada que sea la presente sentencia, al pago de las siguientes prestaciones:

a) Las cotizaciones de salud, previsionales y seguro de cesantía del demandante, por todo el periodo de vigencia de la relación laboral establecido en el punto II.-, con una remuneración base de \$775.845.



b) La suma de \$2.773.645 por concepto de feriado legal y proporcional.

En cuanto a la demanda de nulidad del despido:

V.- Que se rechaza la acción de nulidad de despido por no pago de cotizaciones previsionales.

VI.- Que deberá practicarse liquidación, en su oportunidad, de las sumas ordenadas pagar, con arreglo a lo que dispone el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo, debiendo considerarse las sumas ya consignadas en estos autos.

VII.- Que no se condena en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Notifíquese a los organismos de seguridad social a que se encuentra afiliada la demandante. Oficiése.

Notifíquese a las partes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 457 del Código del Trabajo y para el caso que no asistan, hágase efectivo el apercibimiento dispuesto en su inciso segundo. Dese lectura al fallo por el ministro de fe del tribunal y otórguese copia a la parte que lo solicite; sin perjuicio de ello, hágase también vía correo electrónico a los apoderados de las partes.

Anótese, comuníquese y regístrese.

Archívese cuando en derecho corresponda.

RIT O-58-2021

RUC 21-4-0349051-K

Dictada por **PALOMA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**, Jueza Titular.



En San Antonio a catorce de enero de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución precedente.



A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>